

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN, LINGÜÍSTICA Y LITERATURA
ESCUELA MULTILINGÜE DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES**

**TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE LICENCIADO MULTILINGÜE EN NEGOCIOS
Y RELACIONES INTERNACIONALES**

**ANÁLISIS DE LA DISPARIDAD SOCIOECONÓMICA ENTRE GRECIA Y ALEMANIA
COMO BASE PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RESCATE
A GRECIA BAJO LOS PRINCIPIOS DEL ARTÍCULO 5 DEL TRATADO DE LA
UNIÓN EUROPEA**

FABIÁN ALEJANDRO CAMPOS ARMIJOS

**MAYO, 2015
QUITO - ECUADOR**

DEDICATORIA

*Es inútil que madruguéis,
que veléis hasta muy tarde,
que comáis el pan de vuestros sudores:
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen!*
(Salmo 126)

*“La bendición del Señor es la que enriquece, y nada le añade el trabajo”
(Proverbios 10,22)*

AGRADECIMIENTO

*Quiero mostrar mi agradecimiento ante todo a mis padres
Fabián Campos y Amalia Armijos por la vida llena
de amor, enriquecida por las dificultades y las
alegrías de cada día; a mi familia, especialmente a
mis abuelitas, que me han llenado de mucha ternura;
a los sacerdotes y religiosas que me han
acompañado con su oración y consejo;
a todos mis amigos por la alegría de caminar
juntos en esta etapa del peregrinar;
a mis maestros que han sabido pasarme por el crisol
de las pruebas y con gran aprecio
a María de Lourdes Aguas
por su sabiduría, vocación y amistad.*

ÍNDICE GENERAL

I.	TEMA	1
II.	RESUMEN	1
III.	ABSTRACT	2
IV.	ZUSAMMENFASSUNG	3
V.	INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I		
REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE GRECIA Y ALEMANIA		9
1.1.	De lo Económico	9
1.1.1.	Sistema económico	10
1.1.2.	Indicadores macroeconómicos	13
1.1.3.	Estructura económica	17
1.2.	De lo Social	18
1.2.1.	Empleo	19
1.2.2.	Pobreza	20
1.2.3.	Distribución del ingreso y protección social	22
1.3.	De las Políticas Socioeconómicas	23
1.3.1.	Políticas sociales	24
1.3.2.	Política empresarial	25
1.3.3.	Política fiscal	27
CAPÍTULO II		
MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RESCATE A LA REPÚBLICA HELENA		31
2.1.	Paquete de 2010	32
2.1.1.	Aprobación del Paquete de 2010	32
2.1.2.	Reformas constitucionales griegas	37
2.1.3.	Evolución de las reformas	40
2.2.	Paquete de 2012	42
2.2.2.	Aprobación del Paquete de 2012	43
2.2.2.	Reformas económico financieras	45
2.2.3.	Reformas sociales	46
2.3.	Consecuencias	48
2.3.1.	Resistencia a las medidas de austeridad y rescate	49
2.3.2.	Consecuencias sociales	53
2.3.3.	Consecuencias políticas	55
CAPÍTULO III		
DELIMITACIÓN Y EJERCICIO DE COMPETENCIAS DE LA UE		59
3.1.	Principio de Atribución	60
3.1.1.	Competencia de la Unión Europea	60
3.1.2.	Competencia de los Estados	62
3.1.3.	Objetivos y tratados	65
3.2.	Principio de Subsidiaridad	67
3.2.1.	Ejercicio de Competencias de la Unión Europea	68
3.2.2.	Ejercicio de competencias de Estados y Parlamentos Nacionales	69
3.2.3.	Derechos de los Parlamentos nacionales	70

3.3.	Principio de Proporcionalidad	74
3.3.1.	Definición del Principio de Proporcionalidad	75
3.3.2.	Transferencia del Principio de Proporcionalidad a la Unión Europea	77
3.3.3	Disyuntivas en el Principio de Proporcionalidad	78
VI.	ANÁLISIS	82
VII.	CONCLUSIONES	85
VIII.	RECOMENDACIONES	88
	BIBLIOGRAFÍA	90

I. TEMA
ANÁLISIS DE LA DISPARIDAD SOCIOECONÓMICA ENTRE GRECIA Y ALEMANIA COMO BASE PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RESCATE A GRECIA BAJO LOS PRINCIPIOS DEL ARTÍCULO 5 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA

II. RESUMEN

La aplicación de los Programas de Ajuste Económico a Grecia en 2010 y 2012, por parte de la UE puede explicarse parcialmente por la disparidad socioeconómica entre el país heleno y la República Federal de Alemania. La justificación para dichas intervenciones está dada por los Principios de Atribución, Subsidiaridad y Proporcionalidad del Tratado de la Unión Europea que permiten al Estado griego "ceder" o compartir ciertas competencias con el organismo supranacional. Las implicaciones de los Programas de Ajuste 2010 y 2012 para el pueblo griego pueden ser comprendidas, de manera exploratoria, como negativas en términos: económicos, políticos y sociales tomando en consideración los siguientes marcos teóricos: post desarrollismo, post modernismo, sistema mundo y 'la economía del don'. Por ejemplo: 1) la pérdida de la capacidad del Estado de hacerse cargo de sectores como: salud, educación, transporte; 2) la concepción de una 'solidaridad' marcada por un claro interés del país 'donante'; 3) el distanciamiento entre la clase mandante y la mandataria; y 4) la profundización de un sistema económico ajeno a su sociedad y cultura.

Palabras clave: Post desarrollo, Economía de mercado, Tratado de la Unión Europea, Grecia, Alemania

III. ABSTRACT

The application of the Economic Adjustment Programs for Greece, in 2010 and 2012, by the European Union, can be partially explained by the socioeconomic disparity between Greece and the Federal Republic of Germany. The justification for the above-mentioned interventions is given by the principles of attribution, subsidiarity and proportionality of the Treaty of the European Union that allow the Greek State to "transfer" or share certain competences with the supranational organism. In an exploratory way, one can affirm that the implications of the Economic Adjustment Programs have been negative in economic, political and social terms taking into consideration the following theoretical frameworks: postmodernism, postdevelopment, world systems and the 'gift economy'. For example: 1) the loss of the State's capacity to be in charge of the health, education and transport sectors in charge ; 2) the conception of 'solidarity' marked by a clear interest of the 'donor' country ; 3) the distancing between the commanding class and proxy; and 4) the deepening of an economic system foreign to its society and culture.

Key words: Post-development, Market economy, Treaty on the European Union, Greece, Germany

IV. ZUSAMMENFASSUNG

Die Anwendung der Programme der Wirtschaftlichen Anpassung für Griechenland der Jahre 2010 und 2012 durch die Europäische Union, kann teilweise durch die sozioökonomische Unterschiede zwischen Griechenland und der Bundesrepublik Deutschland erklärt werden. Die Rechtfertigung für das oben erwähnte Eingreifen wird durch die Grundsätze der Zuweisung, Subsidiarität und Proportionalität des Vertrags der Europäischen Union gegeben, die dem griechischen Staat erlauben, bestimmte Kompetenzen zum überstaatlichen Organismus "zu übertragen" oder mit ihm zu teilen. Die Implikationen der Programme der Wirtschaftlichen Anpassung der Jahre 2010 und 2012 für das griechische Volk können als ausbeuterisches Vorgehen in wirtschaftlicher, politischer und sozialer Hinsicht verstanden werden. Dies versteht sich, in Anbetracht der folgenden theoretischen Rahmen: die Postmoderne, die Postentwicklung, das Weltsystem sowie die Geschenkökonomie. Genauer genommen handelt es sich hierbei um 1) den Verantwortungsverlust des Staates hinsichtlich Sektoren wie Gesundheit, Ausbildung und Transport ;2) die Vorstellung einer ‚Solidarität‘ durch ein klares Interesse des ‚Spenders‘ ; 3) die Distanzierung zwischen Regierenden und Vertretung; und 4) die Ausbreitung eines für die griechische Gesellschaft und Kultur fremden Wirtschaftssystems.

Stichworte: Postentwicklung, Marktwirtschaft, Vertrag über die Europäische Union, Griechenland, Deutschland

V. INTRODUCCIÓN

La crisis financiera mundial, que se originó en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers, se trasladó a la Unión Europea por medio de la afectación de las inversiones que los bancos europeos habían realizado en aquel país. Por esta razón, los países europeos establecieron medidas de ayuda a sus bancos. No obstante, en 2009 algunos gobiernos se vieron afectados al no poder contar con financiamiento para sus presupuestos y efectuar los pagos de sus deudas soberanas contraídas por varios años, por lo que, la Unión Europea en su conjunto entró en un proceso de recesión (Comisión Europea, 2014).

Entre los países que podían obtener préstamos únicamente a intereses elevados, que comprometían aún más su estabilidad económica y financiera se encontraba Grecia. Por ello, la Unión Europea consideró que su intervención supraestatal en este país, por medio de mecanismos de resolución de crisis y de protección, que incluían contingentes de dinero, es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema europeo, y se presenta a sí misma, junto al Fondo Monetario Internacional, como aquella que se encuentra llamada a ‘ayudar’ a los países en ‘crisis’. Así, se gesta la aplicación de los denominados Programas de Ajuste Económico para Grecia, los cuales contemplan medidas de ‘austeridad’ (Comisión Europea, 2014), que han sido rechazadas, por ser consideradas una intromisión en el Estado Heleno, por medio de movimientos sociales como los ‘indignados’ o los ‘no pago’ y diferentes actos de protesta (Sotiropoulos, 2013).

De hecho, la desigualdad entre los países miembros de la Unión Europea, fundamentada en el sistema Económico Social de Mercado, se ha hecho evidente en su crisis financiera. En consonancia, la crisis económica europea ha mostrado que dicho modelo de ‘desarrollo’ sería la causa de la perduración y profundización de asimetrías socioeconómicas. Por esta razón, el análisis de este caso de estudio, desde el post desarrollismo, el post modernismo, el ‘don’ y el sistema mundo constituirían un aporte académico para la comprensión de la realidad de dicho sistema y una perspectiva fuera de la concepción formal de la economía de mercado.

Gustavo Esteva (en Sachs, 2010:22) permite analizar este sistema Económico Social de Mercado desde su máximo fundamento desde el post desarrollismo. Pues, este autor establece que el concepto de ‘desarrollo’ se legitimó, en 1949 a través del discurso del entonces Presidente de los E.E.U.U. Harry S. Truman, como un sinónimo de crecimiento económico, que puede ser alcanzado por medio de la producción industrial bajo el modelo económico de mercado estadounidense. Además menciona que, aunque el ‘desarrollo’ ha sido establecido como la meta y destino necesario e inevitable de todas las sociedades, el concepto de ‘desarrollo’ es obsoleto, ya que este se establece únicamente desde la perspectiva de los países industrializados que buscan alcanzar la occidentalización del mundo bajo el modelo de economía de mercado.

Además, la visión de Serge Latouche (en Sachs, 2010: 279) sobre el ‘estándar de vida’ permite analizar la manera en que los Programas de Ajuste Económico para Grecia constituyen una destrucción de los diferentes estilos de vida en favor de la uniformidad. Pues el ‘estándar de vida’ es conceptualizado como el resultado del bienestar material más la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar, lo cual implicaría que un alto ‘estándar de vida’ responde al crecimiento económico. Y es así que este término encierra un reduccionismo unidimensional que no contempla la multiplicidad de formas de vida.

Para complementar esto, el teórico de la postmodernidad, Bauman (2000:10), permite clarificar, en el caso griego, la ‘evaporización’ del Estado – nación y la ‘solidificación’ del sistema económico y financiero como consecuencia de su desregularización, liberalización y flexibilización. Es decir, las finanzas, el capital y el comercio han pasado a regir la sociedad con rigidez, pues se presentan como inamovibles, mientras que las soberanías nacionales se han visto erosionadas por este proceso globalizador del sistema económico. De hecho, la identificación de la modernidad como ‘líquida’ al no contar con instituciones sociales sólidas, y estar marcada por la incertidumbre respecto al futuro, describe, en cierto sentido, las consecuencias sociales que se han generado tras la aplicación de los Programas de Ajuste.

Este análisis se ve integrado, además, por la teoría del ‘don’, desarrollada por Marcel Mauss, pues permite profundizar la interpretación de la relación entre el Estado griego, receptor de la ‘ayuda’ económica, y las instituciones supranacionales, entes ‘solidarios’. Pues, el ‘don’ se encuentra caracterizado por la no equivalencia, es decir que no existe un precio o una forma equivalente de retribución - pues esto lo anularía - sino únicamente una deuda simbólica que desembocaría en el ‘contra don’ que debe ser diferente y diferido, como podrían ser interpretadas las medidas de austeridad. No obstante, dicha teoría contrasta con el caso griego en el hecho de que el receptor debe tener la capacidad de participar en la relación para que la lógica del ‘don’ sea honesta, pues, de lo contrario se convierte en un ‘don venenoso’, perjudicial para el receptor y beneficioso para el otorgante (Kowalski, 2011:190).

No obstante, el eje primordial para el análisis de este trabajo es la diferencia entre la concepción ‘formal’ y ‘sustantivista’ de la economía, definida por Polanyi (1994: 391). Para este autor, la concepción formal de economía es aplicable únicamente para la economía de mercado ya que esta no identifica cómo la actividad económica se encuentra articulada en la sociedad. En continuidad, identifica que a lo largo de la historia que la economía se ha encontrado ‘incrustada’ en la sociedad, mientras que en la economía de mercado es la sociedad la que busca incrustarse en ella, bajo lo cual se puede leer el rechazo del pueblo griego a los Programas de Ajuste. Dicho ‘incrustamiento’ de la economía en la sociedad se da a través de la reciprocidad, la redistribución, la hacienda y el intercambio. Sin embargo, este último constituye solamente una, entre otras formas, de gestionar los recursos.

Con este marco teórico, que reúne diferentes pensamientos críticos sobre los supuestos sobre los que se ha construido el actual orden mundial, el presente trabajo busca responder a la siguiente hipótesis: La disparidad socioeconómica entre Alemania y Grecia en 2008 justificaría las medidas de austeridad y rescate impuestas a la República de Grecia por parte de la Unión Europea, que estarían acordes a los principios que rigen la delimitación y ejercicio de competencias de la UE del Artículo 5 del Tratado de la UE.

Para esto, en primer lugar, se buscará identificar la disparidad socioeconómica entre Grecia y Alemania, en segundo lugar, se procederá a describir las medidas de austeridad y rescate a la República Helena de 2010 y 2012 y, en tercer lugar, se sucederá a determinar la delimitación y ejercicio de competencias de la Unión Europea según el Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Todo esto con el objetivo general de: Analizar la disparidad socioeconómica entre Grecia y Alemania como base para la aplicación de medidas de austeridad y rescate a Grecia bajo el Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. La delimitación temporal de este trabajo será entre 2008 y 2012 y cuyo espacio abarcará específicamente a la República Helena y a la República Federal de Alemania como miembros de la Unión Europea.

En esta línea, las teorías post desarrollistas, post modernistas, del ‘don’ y del sistema mundo podrían contribuir a la investigación exploratoria de esta realidad de inicios del siglo XXI, desde una perspectiva conceptual nueva generada en contraposición a la economía de mercado. Por ello, partiendo de conceptos como la solidaridad, la gratuidad, el ‘don’, el bien común y la subsidiaridad se podrá, de manera inductiva, analizar la compleja realidad de esta temática. Como base de fuentes de información se han tomado en cuenta los Tratados y documentos oficiales de la Unión Europea, libros e informes de especialistas en temáticas relacionadas, especialmente de profesores en distintas universidades europeas y latinoamericanas.

En este panorama, el presente trabajo de investigación toma relevancia por su composición multidisciplinaria internacional, en la que el derecho internacional y la política exterior se presentan como las grandes ramas estudiadas desde las teorías relacionadas al ‘desarrollo’, permitiendo una perspectiva, aunque no necesariamente de forma completa por la gran cantidad de ramas involucradas, lo más cercana a la complejidad que envuelve la temática planteada. Por esta razón, el trabajo ha sido estructurado en tres capítulos caracterizados cada uno con una temática en particular.

Así, en el Capítulo I se estudiará la realidad socioeconómica de Grecia y Alemania, dividido en tres ejes: económico, social y político. En el Capítulo II

se analizarán las medidas de austeridad y rescate, para lo cual se presentará, en primer plano, el Programa de Ajuste 2010, en segundo plano, el Programa de Ajuste 2012 y, en tercer plano, las consecuencias de estos programas. En el Capítulo III se profundizará en la delimitación y el ejercicio de competencias de la Unión Europea en base al Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para lo cual se dedicará un subcapítulo a cada uno de los principios del Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Es decir, al Principio de Atribución, de Subsidiaridad y de Proporcionalidad. Y para finalizar se realizará un análisis que será la base para la presentación de las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado en este trabajo de investigación.

CAPÍTULO I

REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE GRECIA Y ALEMANIA

En el primer capítulo se presentará de manera descriptiva, analítica, comparativa y estadística la realidad socioeconómica de la República Helénica y la República Federal de Alemania previo al inicio de la crisis económica mundial, con datos del 2008 según Eurostat, y la aplicación del Primer Programa de Ajuste Económico para Grecia con el objetivo de: Identificar la disparidad socioeconómica entre Grecia Alemania. En este apartado se utilizará la Teoría Sistema Mundo, a través de la propuesta de Karl Polanyi y la teoría post desarrollista de Gustavo Esteva para analizar conceptos como: ‘desarrollo’, ‘subdesarrollo’, ‘economía sustantivista’ y ‘economía formal’, que de aquí en adelante estarán marcados entre comillas. Además se complementará el siguiente análisis con conceptos como ‘subsidiariedad’, ‘bien común’ y ‘solidaridad’ de la Doctrina Social de la Iglesia propuesta por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, y Benedicto XVI. La información se presentará en tres subcapítulos. El primero sobre la cuestión económica de ambos países, en los que se identificarán los supuestos en los que se fundamenta la Economía Social de Mercado y las disparidades económicas de ambos países, que en cierto sentido, son base para la aplicación de los Programas de Ajuste para Grecia. El segundo sobre la situación social de los mismos, que presentan también fundamento para las medidas de austeridad y rescate. Y el tercero sobre las políticas socio económicas griegas y alemanas, que en cierto sentido nacen de la concepción de la Doctrina Social de Mercado, solo que con una distinta aplicación. Finalmente, se realizará un análisis de la información del capítulo en base al marco conceptual planteado a fin de responder a la pregunta: ¿La disparidad socioeconómica entre Alemania y Grecia en 2008 serviría de justificación para la aplicación de las medidas de austeridad y rescate a Grecia?

1.1. De lo Económico

En este subcapítulo, con el propósito de identificar cómo la disparidad económica entre la República Federal de Alemania y Grecia habría sido una justificación para la aplicación de las medidas de austeridad y rescate de los

Planes de Ajuste, se presentará en primer plano la construcción histórica y conceptual del Sistema Económico de Mercado contemplado en el Tratado de la Unión Europea, que permitirán identificar las bases de los supuestos sobre los que se ha construido este sistema económico. En segundo plano se hará un análisis comparativo de datos macroeconómicos entre Grecia y Alemania, y en tercer plano de la estructura económica de ambos países. Estos, dos últimos apartados, junto a los supuestos anteriores, permiten identificar el argumento de la aplicación de los Programas de Ajuste descritos en el Capítulo II. La importancia de este sub capítulo radica en el establecimiento conceptual de la Economía Social de Mercado y los datos económicos de ambos países en el año 2008 en el que se gesta la crisis económica mundial.

1.1.1. Sistema económico

Como punto de partida para encontrar la justificación de la intervención de la Unión Europea a Grecia por medio de los Programas de Ajuste en base a la disparidad socioeconómica de Grecia, es imprescindible identificar el sistema económico en el que se fundamentan ambos Estados. Así, La República Federal de Alemania y la República Helena, se encuentran dentro de lo que Polanyi (1994:391-392) define como economía formal y de mercado. En sí, el párrafo primero del numeral 3 del Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (2010) señala que:

La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico.

En este sentido, queda explícitamente establecido que las políticas tomadas por la Unión Europea y sus países miembros deben estar direccionadas hacia la Economía Social de Mercado. Por consiguiente, para una mejor comprensión de este trabajo, es necesario una conceptualización de esto términos: En primer lugar, la concepción formal de economía, como la interpreta Polanyi (1994:391), desde la teoría del sistema mundo, establece la elección de medios escasos para fines alternativos y es aplicable únicamente para la

economía de mercado a la que la sociedad busca ‘incrustarse’¹. En segundo lugar, Polanyi (1994:392) identifica al mercado como el intercambio que existe entre los sujetos y como uno de los elementos de la economía, mas no como el centro de la misma. La Doctrina Social de la Iglesia identifica, además, que el mercado responde a la justicia conmutativa. En este sentido, menciona además que el mercado no produce cohesión social para su funcionamiento y no cumple su función económica, si este únicamente se basa en la equivalencia del valor de los bienes y carece de solidaridad y confianza recíproca (Benedicto XVI, 2009).

Según la Konrad Adenauer Stiftung (2011: 108-110), fundación política allegada a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, la Economía Social de Mercado nace en los grupos anti nazistas: Círculo de Friburgo y Círculo de Kreisau e intelectuales como Müller Armack, Wilhem Röpcke y Alexander Rüstow, representantes además del humanismo económico y social que, frente a las realidades existentes de la época , - el nazismo y el comunismo -, presentan la Economía Social de Mercado como una alternativa social a la economía clásica de mercado y una alternativa liberal a la economía planificada, donde el mercado juega un rol primordial. De hecho, la Escuela Social de mercado se encuentra relacionada a la corriente de pensamiento ordo liberal, que combina el liberalismo con el orden, y el neo escolástico, fundamentado ontológicamente en la dignidad humana. En su inicio, la Economía Social de Mercado fue aplicada por Ludwig Erhart en la República Federal de Alemania, y formó parte del proyecto político de Konrad Adenauer que desembocó en la creación de la Unión Europea.

En un cierto grado, la Economía Social de Mercado, en sus inicios, se encontró influenciada por la enseñanza cristiana de la necesidad de solidaridad en el mercado. Sin embargo, pareciera haberse alejado de esta realidad, por su centralidad en el mercado, lo cual choca con la concepción ‘sustantivista’ de la economía, que identifica la actividad económica como sustento para la reproducción social, pues señala que a lo largo de la historia la economía se ha

¹ Traducido al español desde el término en inglés “embeddedness”, utilizado por Polanyi para describir las diversas formas en las que la sociedad se integra en la economía: 1) Redistribución 2) Reciprocidad 3) Hacienda 4) Intercambio

encontrado incrustada en la sociedad a través de la reciprocidad, la redistribución, la hacienda y el intercambio. Por lo tanto, el intercambio, en este caso concebido como la economía de mercado, constituye solamente una, entre otras formas, de gestionar los recursos y de concebir la economía (Polanyi, 1994: 391).

De hecho, Müller- Armack, economista, sociólogo y político alemán de la fundación Konrad Adenauer Stiftung (2011: 107-108), define la Economía Social de Mercado como la unidad entre los principios de libertad de mercado y equidad social, los cuales se enmarcan en la complementación de la libertad del hombre con la justicia social. Es decir, esta se fundamenta en la organización de mercados para la asignación de recursos; y para una operación eficiente y equitativa del mismo, contempla el establecimiento de condiciones éticas, sociales e institucionales. En efecto, la Economía Social de Mercado intentó consolidar el sistema económico de mercado con la tradición social cristiana de solidaridad y cooperación. Sin embargo, cabe notar que Müller- Armack estableció la Economía Social de Mercado como una idea abierta que puede cambiar su concepto en base a los cambios sociales, siempre y cuando no destruya su fundamento.

Consecuentemente, ciertos rasgos de la doctrina cristiana fueron adoptados por la Economía Social de Mercado. No obstante, esta contrasta con dicha doctrina al determinar el mercado como centro de la economía. Es así que, frente a la crisis financiera, en crítica a Alemania y al sistema económico mundial, Benedicto XVI (2009:26) llama a un cambio de concepción de la libertad y el progreso. En esta línea, por ende, los conceptos de la Economía Social de Mercado, no son del todo correctos para el Pontífice. Por esta razón, cabe notar que la fundación política Konrad Adenauer Stiftung (2011: 111-112) determina que los valores de libertad y justicia social son definidos como complementarios en la Economía Social de Mercado. Así, la libertad es concebida como la contención de todo aquello que atenta contra los derechos de las personas, por lo que la libertad económica se define como la liberación de la iniciativa individual, el espíritu de empresa y las innovaciones como fuente de

productividad y crecimiento económico. La justicia social es concebida como la igualdad de oportunidades para la aplicación de los talentos en solidaridad con los otros.

1.1.2. Indicadores macroeconómicos

La República Federal de Alemania y la República Helena se presentan dispares desde sus mismas características demográficas, por lo que, en cierto sentido, desde un inicio sus desigualdades deberían ser leídas en este contexto. Así, por ejemplo, el 1 de enero de 2008, Alemania contaba con la mayor población de los países miembros de la Unión Europea con 82 217 837 habitantes, mientras que el país heleno contaba con 11 182 224 habitantes (Eurostat, 2008), lo que porcentualmente significaba que Alemania constituía el 16,34 % de la población total de la Unión Europea, mientras que Grecia el 2,2%. (Eurostat, 2008). En esta línea es necesario, además, mencionar que la densidad poblacional de Alemania con 229.9 habitantes por km² superaba a la de Grecia que contaba con 85. 5 habitantes por km² (Eurostat, 2008). Cabe notar que la tasa de natalidad de Alemania en 2008 era de 1.37 y la de Grecia de 1,47 (Eurostat, 2008). Es importante indicar, además, que el porcentaje considerado óptimo para el remplazo poblacional es de 2.1 %, por lo que ambos países se enfrentan a un descenso poblacional.

El PIB, dentro de la economía de mercado se ha convertido como en el determinante del ‘desarrollo’ y del ‘estándar de vida’ (Sachs, 2010, 279). Por lo que, un mayor nivel de este, desde aquella perspectiva, implicaría una economía ‘saludable’, caso contrario se requerirían reformas, como en el caso griego descrito en el siguiente capítulo. Para comprender el término ‘desarrollo’ partiremos desde la visión de la Doctrina Social de la Iglesia, en la que Benedicto XVI y Seewald (2009:24) identifican que la Edad Moderna tomó su camino bajo los conceptos fundamentales de progreso y libertad, pero se preguntan ¿qué es progreso? En base a esta línea, es interesante mencionar la teoría post desarrollista en la que Gustavo Esteva (citado en Sachs, 2010:22) establece que el concepto de ‘desarrollo’ se legitimó en 1949, a través del discurso del entonces presidente de los EE.UU. Harry S. Truman como un

sinónimo de crecimiento económico. Dicho crecimiento se podría alcanzar por medio de la producción industrial bajo el modelo económico de mercado estadounidense. En sí, el mencionado autor señala que el concepto de ‘desarrollo’ es obsoleto, pues este se establece únicamente desde una perspectiva de los países industrializados que buscan alcanzar la occidentalización del mundo bajo el modelo de economía de mercado.

Por consiguiente, el concepto de ‘subdesarrollo’, desde el post desarrollismo según Esteva (en Sachs, 2010: 22) nace de una contraposición al concepto de ‘desarrollo’ emanado por Harry S. Truman, por lo que este está asociado a términos de pobreza, retraso e indignidad, términos que se han asociado a los llamados ‘países del sur’. En la misma dirección, Serge Latouche determina que el ‘estándar de vida’ ha sido conceptualizado como el resultado del bienestar material más la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar. Como consecuencia, un alto ‘estándar de vida’ implicaría crecimiento económico, por lo que los indicadores cuantitativos como el PIB son determinantes, a diferencia de los cualitativos que estarían subordinados al primero. Este término está marcado por un reduccionismo unidimensional al no contemplar la multiplicidad de formas de vida. El término ‘estándar de vida’ estaría siendo utilizado entonces como consecuencia de la destrucción de los diferentes estilos de vida en favor de la uniformidad (Sachs, 2010: 279).

En el caso específico de Grecia, podemos observar como estos conceptos, ‘desarrollo’ (Esteva en Sachs, 2010: 22) y ‘estándar de vida’ (Latouche en Sachs, 2010: 279), juegan un rol importante en la categorización económica de los Estados por parte de las instituciones de la Unión Europea. Por lo que, esta conceptualización constituye una base para identificar el ‘objetivo’ de las medidas de austeridad y rescate que se revisarán en el siguiente capítulo. Pero también permite ya establecer una base para analizar la disyuntiva social que generan las mencionadas medidas en el país heleno, ya que la concepción de ‘desarrollo’ y ‘estándar de vida’ son establecidas únicamente en función de factores numéricos y no cualitativos. De ahí que, determinar la disparidad en los principales indicadores como pobreza, PIB y empleo es fundamental para

analizar el tema de este trabajo, puesto que estos datos son la base y argumentación para la aplicación de las medidas de austeridad.

Ya con estos conceptos podemos dar lectura a los siguientes datos: En 2008 el PIB de Alemania alcanzó los 2 473 800 millones de euros, mientras que el de la República Helénica alcanzó los 233 197,7 millones de euros. Tomando en cuenta las diferencias poblacionales se tiene como resultado que el PIB per cápita de Alemania correspondía a 30 100 euros y el de Grecia a 20 800 euros. (Eurostat, 2008). En este sentido, si se toma como referencia el promedio del PIB per cápita de todos los países miembros de la Unión Europea en 2008 como un 100%, se tiene como resultado que el PIB per cápita de Alemania representaba el 116% del PIB de la Unión Europea, superior al del promedio europeo, mientras que el de Grecia representaba el 93% del PIB de la Unión Europea, es decir inferior al del promedio europeo, por lo que la diferencia entre los mismos es de 23 % (Eurostat, 2008).

Si la base para el ‘desarrollo’ es el crecimiento del PIB (Sachs, 2010, 279), uno de los criterios fundamentales, para una ‘buena’ economía de mercado, es precisamente la premisa de alcanzar la mayor productividad posible. Por ende, el país con mayor productividad, de alguna forma, se ha congratulado con el sistema, y aquel con menor productividad, deberá adaptarse mejor al sistema de mercado al ser ‘inferior’, recordando los planteamientos de Esteva (citado en Sachs 2010:22). Para identificar la productividad del país existen dos indicadores principales: la productividad del trabajo por persona empleada² y la productividad por hora trabajada³. En base a lo antes mencionado, se presentará la diferencia de productividad entre ambos países. Si se toma como referencia la productividad del trabajo por persona empleada de todos los países miembros de la Unión Europea en promedio en 2008, se tiene como resultado que la productividad del trabajo por persona empleada de Alemania representaba el 107,7% del promedio europeo, mientras que el de Grecia representaba el 97,5%

² La productividad del trabajo por persona empleada no hace distinción entre aquellas que trabajan a tiempo completo o a tiempo parcial.

³ La productividad por hora trabajada es el producto real por unidad de insumo de trabajo. Para Eurostat (2008), este indicador permite identificar el ‘desarrollo’ de la productividad del trabajo por persona, puesto que de esta manera se elimina la diferencia en la composición entre trabajo a tiempo parcial y tiempo completo de la fuerza de trabajo entre los países y los años.

del promedio europeo, por lo que la diferencia entre los mismos es de 10.2 % (Eurostat, 2008).

Bajo la denominada productividad por hora trabajada, la disparidad entre Grecia y Alemania habría sido aún mayor. Lo cual, como veremos en el Capítulo II, servirá de argumento para la aplicación de los Programas de Ajuste. Alemania obtuvo como resultado en este indicador en 2008 42 euros por hora trabajada, mientras que Grecia obtuvo 22,2 euros por hora trabajada (Eurostat, 2008). En este sentido, si se toma como referencia la productividad del trabajo por hora de todos los países miembros de la Unión Europea en promedio en 2008, se tiene como resultado que la productividad del trabajo por hora trabajada de Alemania representaba el 126,3% del promedio europeo, mientras que el de Grecia representaba el 83,3% del promedio europeo, por lo que la diferencia entre los mismos es de 43 % (Eurostat, 2008).

La composición de la balanza comercial de ambos países refleja disparidad no únicamente en los volúmenes como resultado de las diferencias antes mencionadas, sino también en su porcentaje respecto al PIB. Es así que las exportaciones de Alemania alcanzaron en este mismo año 1 191 190.0 millones de euros (Eurostat, 2008), las cuales representaron el 48,2 % del PIB (Eurostat, 2008), y las importaciones 1 035 360.0 millones de euros (Eurostat, 2008), las cuales representaron el 41,9 % del PIB (Eurostat, 2008), es decir con una balanza positiva. Mientras que, con respecto a Grecia, las exportaciones fueron de 56 271.1 millones de euros (Eurostat, 2008), las cuales constituyeron el 24,1% del PIB (Eurostat, 2008), y las importaciones de 90 052.1 millones de euros (Eurostat, 2008), las cuales constituyeron el 38,6 % del PIB (Eurostat, 2008), es decir una balanza negativa. Además, la inflación en Alemania en 2008 se ubicó en 2,8% mientras en Grecia en 4,2 % (Eurostat, 2008).

Se constata, por lo tanto, una marcada disparidad entre ambos país en los ámbitos demográfico, productivo y comercial.

1.1.3. Estructura económica

En un sistema económico, fundamentado en la productividad y el crecimiento, el déficit económico es seriamente condenado, por lo que, como se verá en el siguiente capítulo, requeriría de reformas económicas, especialmente dirigidas a reducir el tamaño del aparato público (Comisión Europea, 2011: 32). Es el caso de Alemania y Grecia: En el año 2008 el primero tuvo un déficit⁴ de 1 860 millones de euros que representaron el 0,1 % del PIB, en el mismo periodo el segundo tuvo un déficit de 22 880 millones de euros que representaron el 9,8% del PIB (Eurostat, 2008). Pero para contrastar mejor esta situación entre ambos países, se descompone a continuación el ingreso y egreso de ambos Estados:

Por un lado, el ingreso general total⁵ del gobierno alemán representó el 44% del PIB: el del gobierno central representó el 12,9% del PIB, el del gobierno estatal el 12,3% del PIB, el del gobierno local el 7,8% del PIB y los fondos de seguridad social el 19,6% del PIB ; mientras que el gasto general total de gobierno⁶ representó el 44,1% del PIB: el del gobierno central representó el 13,6% del PIB, el del gobierno estatal el 12,4% del PIB, el del gobierno local el 7,4% del PIB y los fondos de seguridad social el 19,3% del PIB (Eurostat, 2008). En sí, se destaca el déficit del gobierno central alemán con un 0,7% y el del gobierno estatal con un 0,1%, mientras que en los otros de hecho tiene un superávit.

Por otro lado, el ingreso general total del gobierno griego representó el 40,7% del PIB: el del gobierno central representó un 27,4% del PIB, el del

⁴ El Tratado de Maastricht define el déficit y superávit del gobierno general como financiación/ préstamos necesarios de la administración pública Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95). Estos constituyen el resultado de la diferencia entre los ingresos y los gastos del sector de la administración pública, la cual comprende los subsectores de la administración central, las comunidades autónomas, gobiernos locales y fondos de seguridad social. Ambos se encuentran definidos en millones de euros y en su porcentaje respecto al PIB.

⁵ El ingreso general total de las administraciones públicas hace referencia a una lista de categorías como: la producción de mercado, producción para uso final propio, pagos para la producción no de mercado, impuestos sobre la producción y las importaciones, subsidios a la producción, ingreso de las propiedades por cobrar, impuestos corrientes a la renta, a la riqueza, etc., contribuciones sociales, transferencias corrientes y transferencias de capital.

⁶ El gasto general total de las administraciones públicas hace referencia a una lista de categorías como: consumo intermedio, la formación bruta del capital, remuneración a empleados, impuestos sobre la producción, subsidios, ingreso de las propiedades por pagar, impuestos corrientes a la renta, a la riqueza, etc., beneficios sociales, algunas transferencias sociales, otras transferencias corrientes, algunos ajustes, transferencias de capital y transferencias de activos no producidos.

gobierno local 2,8% del PIB, los fondos de seguridad social 20,5% del PIB, mientras que el gasto general total representó el 50,6 % del PIB: el del gobierno central representó un 37,5% del PIB, el del gobierno local 2,9% del PIB, los fondos de seguridad social 20,3% del PIB (Eurostat, 2008). En este caso, se destaca el 10,1% de déficit en el gobierno central, y el superávit del 0,2% en los fondos de seguridad social. Sobre este último cabe notar, además, que el gasto supera en un 0,9% a Alemania.

Se puede observar a través de estas estadísticas como una de las causas para la aplicación de los Programas de Ajuste ha sido los ‘desequilibrios’ económicos en Grecia, entre los que se destacó su nivel de deuda respecto al PIB (Comisión Europea, 2014). En este contexto cabe mencionar que el valor nominal de la deuda no es un factor que recibe atención sino su relación con el PIB. Pues, en el caso alemán, la deuda pública bruta⁷ alcanzó los 1 652 795,9 millones de euros, los cuales significaron, no obstante, el 66,8% del PIB, mientras que en el caso griego, la deuda pública bruta alcanzó los 263 284 millones de euros, los cuales representaron el 112, 9% del PIB (Eurostat, 2008).

1.2. De lo Social

Tras haber analizado la disparidad económica entre Grecia y Alemania, en el presente subcapítulo se analizará la disparidad social entre ambos países, que desde los supuestos de la Economía Social de Mercado, serían base para una reforma contemplada en los Programas de Ajuste. Para este fin, en el primer punto se analizará la situación del empleo y desempleo en ambos países de forma descriptiva y estadística, en donde, no obstante, se notará el choque de las perspectivas de los objetivos nacionales. En el segundo punto se presentarán diferentes categorizaciones conceptuales de pobreza y los porcentajes poblacionales correspondientes a cada una de ellas en el país heleno y en el país germano. Finalmente, en el tercer punto, se describirá la situación de ambos

⁷ La deuda pública bruta es definida por el Tratado de Maastricht como la deuda bruta consolidada de la administración pública en su valor nominal al cierre del año categorizada en la siguientes categorías de pasivos gubernamentales definidas en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC95): efectivos y depósitos, valores distintos de acciones, excluyendo derivados financieros, y préstamos. Este indicador abarca las cuentas del gobierno central, las comunidades autónomas, gobiernos locales y los fondos de seguridad social.

países en la distribución del ingreso y la protección social. Así, la importancia de las temáticas abarcadas en este subcapítulo no radica únicamente en la presentación de la disparidad entre ambos países, sino en comprender si estas determinaron la intervención a Grecia.

1.2.1. Empleo

Como se ha observado en el anterior subcapítulo, factores como la competitividad (Comisión Europea, 2014) y la productividad juegan un rol importante para la categorización de la economía desde la Economía Social de Mercado. Por lo que una duración prolongada de vida laboral resultaría beneficiosa para la producción. Así, en 2008, la duración de vida laboral⁸ en Alemania era de 36.5 años mientras que en Grecia de 31.9 años (Eurostat, 2008). De esta manera, junto a otros criterios anteriormente vistos como la productividad por persona y por hora trabajada, podemos dar lectura a la disparidad de la compensación de los asalariados⁹ entre ambos países, la cual sería resultado de los factores antes mencionados: En la República Federal de Alemania alcanzó los 1 229 400 millones de euros, los cuales representaron el 51,9% del PIB, y en Grecia los 82 925,9 millones de euros, los cuales representaron el 36,7% del PIB (Eurostat, 2008). Es decir, la compensación de los asalariados responde a la productividad y tiempo de trabajo.

Es preciso marcar que al establecer el sistema Económico Social de Mercado para todos los países de la Unión Europea se ha producido, lo que Latouche (en Sachs, 2010:279) llama, un reduccionismo unidimensional, puesto que no se contempla la multiplicidad de formas de vida (Sachs, 2010: 279). Por ejemplo, a pesar de que se determinó, en el subcapítulo anterior la ‘mayor’ productividad por persona y por hora en Alemania (Eurostat, 2008), encontramos una diferencia en las horas trabajadas: De las personas empleadas¹⁰ de la fuerza

⁸ La duración de vida laboral indica el número de años que se espera que una persona de 15 años participe activamente en el mercado laboral durante toda su vida. Estas cifras son resultado de un modelo probabilístico que combina datos demográfico con datos del mercado laboral.

⁹ La compensación de los asalariados hace referencia a la remuneración en efectivo o especie y contribuciones sociales otorgadas por el empleador a sus empleados a cambio de su trabajo.

¹⁰ Existen diferentes categorizaciones de personas empleadas como tiempo completo y tiempo parcial. Con respecto a estos, Eurostat (2008) establece que es imposible una distinción exacta debido a las variaciones de horas de trabajo en

laboral (que incluye también a las desempleadas), una persona a tiempo completo¹¹ durante una semana en Alemania alcanzó, en promedio, las 41,7 horas y en Grecia las 43,7 (Eurostat, 2008) y a tiempo parcial en Alemania alcanzó las 17,9 y en Grecia las 20,5 (Eurostat, 2008).

Además, a pesar de que ambos países se encuentran, en teoría, bajo un mismo sistema económico, existen diferencias de valorizaciones respecto al mismo. Pues, aunque, en Alemania se registró una tasa de desempleo¹² del 7,5%, mientras que en Grecia del 7,8% (Eurostat, 2008) y la tasa de empleo¹³ en la República Federal de Alemania alcanzaba en 2008 el 74% y en la República Helénica el 66,5% (Eurostat, 2008), en Grecia existen más personas con trabajo a tiempo completo, ya que la tasa de empleo a tiempo parcial del total de empleados germana fue de 25,9%, mientras que la helénica de 5,6%. (Eurostat, 2008) Y, con respecto a la tasa de empleo con un contrato de duración limitada¹⁴ del total de empleados en el país, Alemania tenía un 14,7% mientras que Grecia un 11,5% (Eurostat, 2008).

1.2.2. Pobreza

En cierto sentido, hasta ahora se ha analizado la disparidad en cuanto al ‘desarrollo’ alcanzado por ambos países, desde el punto de vista de la Economía Social de Mercado. Ahora, la disparidad, que configuraría una justificación para los programas de ajuste, sería, también, en base a su nivel de ‘subdesarrollo’,

los diferentes estados miembros de la Unión Europea y las diversas ramas de la industria. De hecho, la distinción únicamente se basa en la respuesta del encuestado.

¹¹ Esta cifra incluye horas extras y descarta tiempo de traslado al trabajo y comidas.

¹² La tasa de desempleo, según Eurostat (2008), corresponde al porcentaje de persona, entre 15 y 74 años, desempleadas del total de la fuerza laboral. Una persona es considerada desempleada cuando se encuentra sin empleo durante la semana de referencia, está disponible para un empleo o autoempleo antes del final de las dos semanas consecutivas de la semana de referencia, o ha buscado activamente un trabajo remunerado o un autoempleo durante las cuatro semanas previas, incluyendo la semana de referencia. En esta categoría también se encuentran las personas que han encontrado un trabajo para ser iniciado con una posterioridad máxima de tres meses.

¹³ La tasa de empleo es resultado de la división del número de personas entre 20 y 64 años, que durante la semana de referencia hayan realizado trabajos remunerados o con beneficio de al menos una hora o no estaban trabajando pero tiene un empleo del cual estaban temporalmente ausentes, para el número total de personas entre ese grupo de edad. En esta tasa se incluye únicamente a la población que habita en casas privadas y se descarta a aquellas que vivan en hogares colectivos como hospitales y residencias.

¹⁴ La tasa de empleo con un contrato de duración limitada hace referencia a los trabajos temporales que terminan tras una fecha fijada, el cumplimiento de una tarea determinada o el regreso de un empleado que ha sido reemplazado temporalmente. Dentro de esta tasa se encuentran las personas con empleo estacional, las personas que han sido contratadas con una agencia de trabajo sin un contrato de trabajo de tiempo ilimitado para realizar una tarea específica para un tercero y las personas con contratos de formación específica.

asociado a términos de pobreza, retraso e indignidad, como se mencionó anteriormente (Sachs, 2010:22). Por ejemplo, en relación a las personas en riesgo de pobreza o exclusión social¹⁵, cabe notar que en Alemania se ubicó en un 20,1% del total de la población, es decir con 16 345 000 personas, mientras que en Grecia este porcentaje fue superado con 8 puntos porcentuales más que en el país germano, es decir con un 28,1 % del total de la población que implica 3 046 000 personas (Eurostat, 2008). Pero, para cotejar esta información, es necesario presentar también contrastes entre los componentes de esta tasa.

Así, a pesar de que la Economía Social de Mercado establece el ‘estándar de vida’ como el resultado del bienestar material más la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar, sin contemplar la multiplicidad de formas de vida (Sachs, 2010: 279); estos últimos aún estarían presentes en la conformación de los estilos de vida que se eligen dentro del mismo sistema. Es así que, por ejemplo, existe contraste entre las personas severamente privadas materialmente¹⁶ y las personas que viven en un hogar con intensidad de trabajo muy baja¹⁷ de ambos países. Pues, mientras que en la primera categoría en Alemania se encontraban 4 442 000 personas que representaban el 5,5 % de la población, y en Grecia 1 213 000 que representaban el 11,2% de la población (Eurostat, 2008), en la segunda categoría en el país germano se encontraban 7 044 000 personas, que representaron el 11,7 % de la población, y en el país heleno se encontraban 611 00, que representaron el 7,5 % de la población (Eurostat, 2008).

En sí, la justificación de la aplicación de los programas de ajuste, en base a la cuestión social, se fundamentaría en el supuesto de “a mayor crecimiento económico, un mayor estándar de vida” como lo describió ya Latouche (citado

¹⁵ Las personas en riesgo de pobreza o exclusión social abarca al grupo de personas que se encuentran en riesgo de pobreza, personas severamente privadas materialmente o que viven en hogares una intensidad de trabajo muy baja. Cabe notar que una persona es contabilizada en riesgo de pobreza o exclusión social únicamente una vez, aún si esta se apega a las características de varios de los sub indicadores antes mencionados.

¹⁶ Una persona es considerada severamente privada materialmente cuando mantiene condiciones de vida severamente limitadas debido a la falta de recursos. Para la determinación de dicho indicador se ha determinado que la persona cumpla con al menos cuatro de las siguientes características: La persona no puede pagar gastos de renta o servicios públicos, no puede mantener la casa lo suficientemente caliente, no puede afrontar gastos inesperados, no puede comer carne, pescado o alguna proteína equivalente cada dos días, no puede cubrir una semana de vacaciones fuera de casa, no puede adquirir un auto, no puede adquirir una lavadora, no puede adquirir una televisión a color y/o no puede adquirir un teléfono.

¹⁷ Según Eurostat (2008), las personas que viven en un hogar con intensidad de trabajo muy baja son aquellas que, entre los 0 y 59 años de edad, viven en hogares donde los adultos, entre los 18 y 59 años de edad, trabajan menos del 20 % del total de su potencial de trabajo durante el último año.

en Sachs, 2010: 279). Sin embargo, hay variables que no son tomadas en cuenta en el sistema de cuentas nacionales como el trabajo doméstico, y la producción para el autoconsumo, entre otros. Es así que, por ejemplo, una persona es considerada en riesgo de pobreza cuando tiene una renta disponible menor al 60% de la media nacional tras la transferencia social: porcentaje que constituye el umbral de riesgo de pobreza. De hecho, el umbral de riesgo de pobreza germano en 2008 fue de 10 804 PPS¹⁸ para una sola persona y de 22 689 PPS para hogares conformados por dos adultos y dos menores de 14 años, mientras que el umbral helénico fue de 7 219 PPS para una persona y de 15 160 PPS para hogares conformados por dos adultos y dos menores de 14 años. (Eurostat, 2008).

1.2.3. Distribución del ingreso y protección social

Una injusta distribución de la riqueza, en cierto sentido, podría ser un reflejo de la falta de direccionamiento hacia el bien común, lo que daría un reflejo de falta de solidaridad (Scannone, 2014). En este contexto, cabe destacar que, aunque por medio del coeficiente de Gini¹⁹ podemos determinar que, según Eurostat (2008), existe mayor desigualdad en la distribución de la riqueza en Grecia con 33.4 que en Alemania con 30.1. Y de la misma forma con la proporción de la cuota de ingresos en quintiles (S80/S20)²⁰ que en Alemania tuvo 4.8 y en Grecia 5.9 (Eurostat, 2008).

No obstante, se destaca el ‘gasto’ en protección social²¹ de ambos países que representó en Alemania en 2008 el 28 % del PIB, mientras que en Grecia en 2008 el 26,2 % del PIB (Eurostat, 2008). Y ante todo, es de notar, que los beneficios de protección social, en ambos casos, más aún en Grecia, superan el

¹⁸ Estas cifras se encuentran en PPS (Purchase Parity Standards) para tomar en cuenta la diferencia de costos de vida entre los diferentes países de la Unión Europea.

¹⁹ El coeficiente de Gini es definido como la relación que existe entre la participación acumulada de la población distribuida según el nivel de renta disponible equivalente y la participación acumulada de la renta disponible total equivalente recibida por ellos.

²⁰ La proporción de la cuota de ingresos en quintiles (S80/S20) permite determinar la proporción de los ingresos totales percibidos por el 20 % de la población con los ingresos más bajos, conocido como quintil inferior, la proporción de los ingresos totales percibidos por el 20 % de la población con los ingresos más altos, conocido como quintil superior.

²¹ El gasto en protección social recoge en primer lugar los beneficios sociales o transferencias, en efectivo o especie, realizadas a los hogares o individuos para aplacar determinadas necesidades, en segundo lugar los costos administrativos y en tercer lugar otros gastos por regímenes de protección social.

96% del PIB. Pues del total del gasto alemán en esta materia, el 96,12 % correspondió a beneficios de protección social, el 3,8 % a costos administrativos y el 0,3 % a otros gastos; y del total del gasto griego en esta materia, el 96,74 % correspondió a beneficios de protección social, el 3,25 a costos administrativos, y el 0,01 a otros gastos (Eurostat, 2008). Lo cual, a pesar de que Grecia tiene mayor desigualdad, da cuenta de las similitudes de ambos países en lo que respecta a la inversión del Estado en bienestar social.

De hecho, esta transferencia hacia los sectores más vulnerables económicamente menos favorecidos se podría interpretar como directrices hacia el bien común, definido por la Doctrina Social de la Iglesia como : “ *el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección*” (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2004: 164) y hacia la justicia que “*(...) se traduce en la actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona, (...)*” (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2004: 201). Por ejemplo, en el caso alemán, el gasto en protección social por habitante alcanzó los 8 093,46 euros o los 8 203,77 PPS²², mientras que en el caso griego los 4 924 euros o los 6 047,41 PPS (Eurostat, 2008).

1.3. De las Políticas Socioeconómicas

Con el fin de identificar los fundamentos para la reforma de las políticas sociales y económicas de Grecia por medio de los Programas de Ajuste, que se presentarán en el Capítulo II, se contrastarán aquellas de Alemania con aquellas de Grecia previas a la crisis económica mundial. En primer lugar, se analizarán los fundamentos de las políticas sociales del gobierno griego y alemán, que en cierto sentido guardan un trasfondo en común con diferente aplicación. En segundo lugar, se abordará el direccionamiento de la política empresarial de cada uno de los países y su incidencia en los procesos económicos y sociales. En tercer lugar, se analizará el direccionamiento que ha tenido la política fiscal de Alemania y Grecia, destacando sus semejanzas en la base y diferencias. En sí, la

²² Los PPS constituye una unidad monetaria artificial, con la cual, en teoría, se puede adquirir la misma cantidad de bienes y servicios en cada país (Eurostat, 2008). Así, con estos podemos comprender mejor el poder adquisitivo de un monto en cada uno de los países.

identificación de las políticas socioeconómicas adquiere relevancia al permitir no únicamente enmarcar en el contexto político los dos subcapítulos anteriores, sino también en cierto sentido la distinta forma de aplicar la economía social de mercado, ya previamente establecida para ambos Estados.

1.3.1. Políticas sociales

La Economía Social de Mercado se ha construido, en gran parte, fundamentada en la política social, la cual nace de la definición de Alemania como un Estado Social, en el que la tarea básica y prioritaria es la protección social de todos sus ciudadanos, según Giehle (2011). Esta política nace bajo el lema de “bienestar para todos y justicia social” del Ministro Federal de Economía Ludwig Erhard en la década de los 50. Es así que el denominado “modelo alemán” es considerado una de las redes de protección social más completas del mundo que contempla seguros de enfermedad, pensiones, seguro de desempleo, compensación de las cargas familiares, prestación asistencial básica para jubilados y personas con incapacidad laboral permanente. De hecho, en 2009 el gasto social público de Alemania representó el 26,7% del PIB, superando así a Estados Unidos con el 15,9% del PIB y a la media de los países de la OCDE con 20,5%.

Es de destacar que entre las prioridades de la política de seguridad social alemana se encuentra la atención sanitaria universal, cuyo gasto en 2009 alcanzó el 10,4 % del PIB, con 1,5 puntos porcentuales más a la media de los países de la OCDE. Así, el sistema nacional de salud constituye el mayor sector de empleo con 4 millones de puestos de trabajo. Con respecto a la previsión para la vejez, además del seguro obligatorio de pensiones se ha incluido la previsión empresarial y privada, que consiste en cuotas voluntarias capitalizables, y viviendas en propiedad en planes de previsión, que permite destinar el capital acumulado a la adquisición de una vivienda para uso propio en la tercera edad (Tatsachen über Deutschland, 2011).

Aunque con una aplicación diferente, las políticas sociales griegas, al igual que las alemanas, juegan un rol fundamental para el Estado. En sí, las

políticas sociales griegas se han direccionado hacia el sistema de pensiones, el cual según la OCDE (2010: 5-6), constituye uno de los países de su organización con mayor gasto al respecto frente a su media. De hecho, los derechos de pensión pública en el país heleno son considerados los más generosos de entre todos los miembros de dicha organización, pues, según las estadísticas de la OCDE de 2009, una persona que en 2010 haya tenido 20 años y se jubile a los 65 años de edad recibirá el 95,7% de sus ganancias promedio de toda su economía, seguida de un 81,2% en España, un 67,9% en Italia y un 43% en Alemania, en relación al 59% de la media de la OCDE. No obstante, a pesar de que la edad de jubilación en Grecia es de 65 años, solo el 44% de personas entre 55 y 64 años se encuentra inserto en el mercado laboral, en comparación al 52% de la media de los países de la OCDE. De hecho la edad de salida del mercado laboral en Grecia es de 62,4 años entre los hombres y 60,9 para las mujeres.

En base a los datos anteriormente mencionados, se observa que, si bien Alemania ha constituido mecanismos de protección social, Grecia también los ha establecido de acuerdo a su realidad socioeconómica local, y naturalmente a sus objetivos particulares como Estado.

1.3.2. Política empresarial

En concordancia con los conceptos tratados en el primer subcapítulo sobre la libertad económica y la justicia social de la Konrad Adenauer Stiftung (2011: 111-112), la política empresarial alemana se ha direccionado hacia el fomento de las pequeñas y medianas empresas y la empresa familiar. En Alemania existen alrededor de 3,6 millones de pequeñas y medianas empresas, las cuales constituyen el 99,7% del total de empresas. Estas empresas son incluidas en esta categoría cuando su facturación no ha superado los 50 millones de euros anuales y cuentan con menos de 500 empleados. De hecho, el 70 % de empleados trabajan para este tipo de empresas, de las cuales el 19,7% se encuentran inmersas en el comercio, el 31,4% en la industria y el 48,9 % en el sector de servicios. En esta línea, el 95% de las empresas en Alemania son empresas familiares que se traspasan de generación en generación y son dirigidas directamente por sus propietarios, es decir que el capital en su mayoría

se encuentra en manos de la dirección de la misma (Tatsachen über Deutschland, 2011).

En este contexto, según la misma fuente antes mencionada, cabe remarcar que las políticas empresariales del Gobierno Federal Alemán se han direccionado hacia las reducciones fiscales y mejores desgravaciones para las pequeñas y medianas empresas y la concesión de créditos estatales para su fomento. Las pequeñas y medianas empresas familiares constituyen, de hecho, el núcleo y el eje de la economía alemana como se ha señalado en el párrafo anterior. El direccionamiento de las políticas hacia este tipo de empresas se debería a que estas contarían con un alto nivel de especialización, alta capacidad de cubrir nichos de mercado, agilidad para colocar productos en el mercado y orientación internacional; factores que han dado como resultado que las PYMES alemanas sean líderes mundiales en sus áreas.

En contraste con la política empresarial alemana, la República Helénica se ha caracterizado por una política empresarial direccionada hacia la empresa estatal, que, en teoría, se enfoca, de igual forma, en uno de los fines de la Economía Social del Mercado, el bien común de la población por sus beneficios colectivos, no necesariamente económicos (Scannone, 2014). Sin embargo, según la OCDE (2010:7), durante el periodo 2000 – 2008 este país fue uno de los privatizadores más activos de esta organización. A pesar de ello, en el año 2010 Grecia contaba con 74 empresas estatales con un valor de 44 000 millones de euros. De estas 74 empresas, 64 eran controladas directamente por el Estado, entre las que se encontraban 7 de actividades productivas, 3 de finanzas, 21 de servicios públicos y transporte, 9 de bienes raíces y 24 en la categoría de ‘otras’; mientras que las 10 restantes eran empresas cotizadas en la bolsa en las que el gobierno contaba con al menos más del 10 % de las acciones, entre las que se encontraban: 1 de actividades productivas, 2 de finanzas, 6 de servicios públicos y transporte y 1 en la categoría de ‘otras’.

La empresa estatal griega, en cierto grado, ha jugado un importante rol social con miras al bien común, pues ha prestado servicios públicos (Scannone, 2014). Sin embargo, sus deficiencias, más organizativas, fueron los procesos

burocráticos, que de fondo, fueron fundamento para su proceso de privatización con los Programas de Ajuste, que se describirán en el siguiente capítulo (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, 2011: 32). Por ejemplo, la empresa estatal griega presta servicios públicos de gran envergadura sin recibir compensaciones. Pero las políticas direccionadas hacia el crecimiento burocrático con la alta contratación de personal y los altos costes laborales, y la baja producción y tecnologización, habrían provocado fuerte asignación del presupuesto del Estado. Un claro contraste entre el direccionamiento social de la política económica griega y aquella fundamentada en el rendimiento, que ha generado criterios contrapuestos, es el hecho de que las empresas estatales griegas han fijado los precios por debajo de los estándares internacionales. Según la OCDE (2010:7), esto ha conducido hacia una baja productividad y pobre calidad del servicio y hacia externalidades negativas en el resto de la economía, pues los servicios públicos, el transporte y las finanzas, áreas en las que las empresas estatales son dominantes, tienen un bajo rendimiento.

1.3.3. Política fiscal

La política fiscal de Alemania se encuentra caracterizada por la visión de la doctrina social de mercado. Es así que el sistema fiscal alemán concentra alrededor de 40 impuestos clasificados en impuestos federales, estatales, municipales, comunales y eclesiásticos. Por ejemplo, en los impuestos sobre los bienes, no existen únicamente en su clasificación el impuesto a la renta, que contempla el impuesto sobre el salario e impuesto sobre el rendimiento de capital, el impuesto de herencia, el impuesto sobre los inmuebles, el impuesto sobre las donaciones el impuesto de sociedades y el impuesto sobre actividades económicas, sino que existe también el recargo de solidaridad que se transfiere a los Estados federados del este de Alemania (Hacke, 2012), considerados, en cierto sentido ‘menos desarrollados’.

En consonancia, además, en la consolidación de un Estado social existen los impuestos a las transacciones²³, todos los impuestos especiales como a la energía, al tabaco, las bebidas, los perros, entre otros y los impuestos eclesiásticos que fluctúan entre un 8 y 9 % del impuesto a la renta para los católicos, evangélicos, judíos y veterocatólicos, que no únicamente cubren los costes de la manutención religiosa, sino que se extienden hacia un complejo sistema de salud, educación y asistencia social (Hacke, 2012).

La política fiscal de Alemania ha sido considerada una de las bases de su Estado social. De hecho, el gravamen fiscal ha mantenido estabilidad desde los años 70. Esta se ha encontrado entorno al 22 y 24 % del PIB, sin contar con las contribuciones de la seguridad social, teniendo su declive, a menos del 22%, en la administración de la coalición del Partido Verde y del Partido Social Demócrata, para volver a incrementarse desde 2005 con la administración de la Unión Demócrata Cristiana / Unión Social Cristiana, que sería la que enfrente la crisis económica mundial. De hecho, en 2013 los ingresos tributarios ascendieron a 23,6% del PIB y a 39,3% del PIB contando con las contribuciones a la seguridad social, las cuales han constituido el mayor porcentaje en los últimos 10 años (DIW, 2013).

En cierta relación con la política fiscal alemana, las políticas fiscales del país heleno se han direccionado hacia la construcción de un Estado social, por medio de las cotizaciones de seguridad social e impuesto a la renta, pues la porción fiscal marginal de estas de manera conjunta, antes de las medidas de austeridad y rescate aplicadas a partir de 2010, se extendía entre el 50%-60% de los ingresos a los 2/3 de ganancias promedio a tiempo completo de un trabajador, la cual habría constituido una tasa alta entre los países miembros de la OCDE. No obstante, aunque la política fiscal respecto al IVA fue del 19 % y subida a 21 % en 2010, dentro de la media de la Unión Europea, las brechas en la estructura de tarifas habrían sido fuertes, y la lista de productos y servicios con tarifas reducidas habría sido considerada larga (OCDE, 2010: 9-10).

²³ El impuesto a las transacciones incluye el impuesto de seguro, impuesto sobre vehículos automóviles, impuesto sobre el tráfico aéreo, cobrados por la federación, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el impuesto a la lotería, el impuesto al casino, el impuesto contra incendios, cobrados por los Estados.

En contraste con la política fiscal alemana, el problema de la política fiscal griega habría sido la eficacia del sistema. Pues, según el documento *Greece at a Glance, Policies for a Sustainable Recovery* de la OCDE (2010: 9-10), ha existido en el país heleno una baja recaudación de impuestos como consecuencia de una evasión fiscal generalizada y una débil administración tributaria con personal bajamente cualificado, poca infraestructura y débil sistema informático. De hecho, la recaudación fiscal respecto al PIB alcanzaba el 32 %, cifra que se encuentra 4 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países de la OCDE y 8 puntos porcentuales menos al promedio de los países de la Unión Europea (UE15). Es por eso que al reducir las brechas entre las tasas efectivas y legales del IVA, la contribución social a la de los empleados y el impuesto a los ingresos corporativos, igualándolas a la media de la Unión Europea, los ingresos fiscales podrían aumentar en un 3,5 % del PIB.

Tras haber identificado la disparidad socioeconómica entre Grecia y Alemania, es preciso integrar y destacar lo siguiente. La transferencia del modelo social de mercado originado en Alemania como modelo de ‘desarrollo’ para la Unión Europea (Konrad Adenauer Stiftung, 2011: 108-110), podría considerarse un direccionamiento hacia una única visión de lo que constituye el ‘desarrollo’, dejando, quizá, de lado la multiplicidad de paradigmas, ideales y objetivos de los Estados conformantes de la Unión Europea en favor de la uniformidad. Lo cual, marcaría la concepción de ‘desarrollo’ y ‘subdesarrollo’ entorno al crecimiento económico en base al modelo económico social de mercado (Sachs, 2010:22), descartando de facto la visión económica ‘sustantivista’.

Esta realidad se hace evidente en la concepción meramente numérica para establecer el ‘desarrollo’ y el ‘estándar de vida’ de las poblaciones, sin contextualizarla en su realidad sociopolítica e histórica, que se hacen evidentes en el establecimiento de sus políticas. Así, por ejemplo, el direccionamiento de las políticas sociales griegas hacia el sistema de pensiones (OCDE, 2010: 5-6), que contemplan un ingreso 95,7 % de las ganancias promedio de toda la economía para quien se jubile, podría considerarse una respuesta a la realidad particular del nivel de ingresos en el país heleno, en

donde el 28,1 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza, y en donde hay vínculos familiares fuertes y por tanto una capacidad redistributiva de dichas pensiones al interno de la familia, como nos los demostraría el porcentaje de las personas que viven en un hogar con intensidad de trabajo muy baja, anteriormente mencionadas (Eurostat, 2008). Mientras que la política de seguridad social alemana, centrada en la atención sanitaria universal (Tatsachen über Deutschland, 2011), mas no en el sistema de pensiones, pues contempla un ingreso de 43% de las ganancias promedio de toda la economía para quien se jubile, responde a su alto nivel de PIB per cápita de 30 100 euros, que en teoría recibiría una persona anualmente a lo largo de su vida laboral, en comparación a los 20 800 euros de Grecia (Eurostat,2008).

En fin, la disparidad socioeconómica entre Grecia y Alemania, desde el punto de vista de la economía social de mercado, marca una categorización positiva hacia Alemania por su direccionamiento hacia el crecimiento económico fundamentado en la productividad y competitividad como base para lo que Latouche (citado en Sachs, 2010, 279) llama un ‘buen’ ‘estándar de vida’, y negativa hacia Grecia, que aunque en su fundamento se basa de igual manera en la Economía Social de Mercado, contrasta en su aplicación y en el rol del Estado. Por lo que, si bien en este apartado no se puede concluir categóricamente el fundamento para la aplicación de las medidas de austeridad y rescate, sí se puede afirmar que los supuestos en los que se fundamenta el Sistema Económico de Mercado, junto a los datos presentados como PIB y productividad, dejan la puerta abierta para que sea Alemania el país que lidere y promueva dentro de la Unión Europea los programas de rescate, por lo que el II y III capítulo son necesarios.

CAPÍTULO II

MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RESCATE A LA REPÚBLICA HELENA

Con el objetivo de: Describir las medidas de austeridad y rescate a la República Helena de 2010 y 2012; en el segundo capítulo se presentará de manera descriptiva y analítica el contexto de aprobación y aplicación del Primer y Segundo Programa de Ajuste Económico para Grecia, cuyas medidas de austeridad y rescate darían cuenta en un determinado grado de la vulnerabilidad económica y política del Estado Heleno frente a la legislación Europea vigente, lo cual se verá complementado en el capítulo tercero con el análisis de los principios para determinar las competencias tanto del Estado como de la Unión. En este apartado, además de las teorías utilizadas en el capítulo anterior, se utilizará la Teoría Sistema Mundo, a través de la propuesta de Karl Polanyi, la teoría post modernista de Bauman, la teoría del ‘don’ de Marcel Mauss y el análisis de ayuda de Marianne Gronemeyer para identificar conceptos como: ‘Estado líquido’, ‘ayuda’, ‘don’ y ‘contradon’, que de aquí en adelante estarán marcados entre comillas. La información se presentará en tres subcapítulos. El primero sobre el Primer Programa de Ajuste Económico para Grecia, en el que se presentará no solamente la aprobación y evolución del mismo, sino las reformas constitucionales griegas para su aprobación. Este constituye punto clave para la comprensión del estado de vulnerabilidad político del Estado griego. El segundo abordará el Segundo Programa de Ajuste Económico para Grecia, en el que se notará el proceso de aplicación de las medidas de austeridad y rescate con el consentimiento del Estado Griego, como la cesión de las políticas de la República Helena para con la Unión Europea. El tercero sobre las consecuencias económicas, sociales y políticas de la aplicación de ambos programas en el que se destacarán los cambios políticos del pueblo griego y su respuesta a un Estado griego casi ‘evaporado’. Finalmente, se realizará un análisis general de la información del capítulo en base a la terminología planteada con el fin de responder a la pregunta: ¿Las medidas de austeridad y rescate aplicadas en Grecia darían cuenta del estado de vulnerabilidad económica y política del Estado Heleno frente a la legislación europea vigente?

2.1. Paquete de 2010

Con el fin de describir el proceso de la aplicación del Primer Programa de Ajuste para Grecia se presentará en el primer punto el contexto político económico en el que se realiza su aprobación por parte de la Unión Europea. Además se describirá en el mismo punto la influencia de la Unión para la aplicación de las medidas de austeridad y rescate. Las cuales son leídas como signo del estado de vulnerabilidad económica y política de Grecia frente a la mencionada entidad supranacional. En el segundo punto se describirán las reformas constitucionales que se efectuaron en Grecia para la adopción del mencionado Programa de Ajuste como elemento clave para comprender el debilitamiento o, lo que Bauman, llama la ‘evaporización’ del Estado Heleno. Finalmente, en el tercer punto se recurrirá a la quinta revisión del Programa de Ajuste Económico para Grecia para identificar la evolución del programa y la gestación de un segundo programa como muestra de la fuerza condicionante de la Unión Europea. Este subcapítulo constituye una clave para el análisis de la aplicación de las medidas de austeridad y rescate, no únicamente por su contenido descriptivo de los hechos, sino por su análisis sobre el estado de vulnerabilidad económico y político de Grecia frente a la Unión Europea.

2.1.1. Aprobación del Paquete 2010

Aunque la crisis financiera mundial se genera de forma externa a la Unión Europea, sus efectos llegan a ella a los pocos meses al estar inmersa en la economía de mercado. De hecho, la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos afectó las inversiones que los bancos europeos habían realizado en aquel país. Frente a esta crisis, en 2008, Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Francia establecieron medidas de salvataje a sus bancos, las cuales sin embargo fueron consideradas insuficientes por la Comisión Europea (2014). Con dichas medidas de salvataje, algunos gobiernos como el de Irlanda comprometieron su estabilidad financiera. Ya en 2009 la Unión Europea en su conjunto entró en un proceso de recesión y los gobiernos se ven afectados al no poder contar con financiamiento para sus presupuestos y efectuar los pagos de sus deudas soberanas contraídas por varios años. La crisis afecta en especial a

países como Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España (Comisión Europea, 2014).

Frente a esta situación, la Unión Europea acusó a la mala gestión de los Estados afectados como responsable de la crisis, ya que los estándares establecidos en los tratados de la entidad supranacional no se habrían cumplido y no habrían existido mecanismos supraestatales para controlar aquello. Es así que la Comisión Europea (2014) determina cinco motivos por los que la crisis afectó especialmente a los países denominados, peyorativamente, PIIGS²⁴ y a Chipre: En primer lugar, la Comisión reconoce la poca atención al nivel de la deuda pública centrándose únicamente en los déficits presupuestarios anuales. En segundo lugar, la misma Comisión afirma que no se vigiló la competitividad y los desequilibrios macroeconómicos. En tercer lugar, además, no existió una correcta observancia a las normas establecidas para los miembros de los países de la zona euro. En cuarto lugar, la toma de decisiones respecto a factores macroeconómicos y del conjunto de la zona fue demasiado lenta debido a la debilidad institucional, afirma la Comisión. Finalmente, la inexistencia de mecanismos de ayuda financiera socavó aún más el problema y prolongó la toma de decisiones en favor de los países en crisis.

Ante este panorama la Unión Europea consideró que una intervención es necesaria para garantizar la sostenibilidad de la misma Unión, y se presentó a sí misma como la entidad llamada a ‘ayudar’ a los países en ‘crisis’. Es por ello que, la Unión Europea llevó a cabo su intervención por medio de mecanismos de resolución de crisis y de protección, los cuales incluían contingentes de dinero para los países con problemas financieros, bajo el argumento de que los países en ‘crisis’ podían obtener préstamos únicamente a intereses elevados que comprometían aún más su estabilidad económica y financiera, (Comisión Europea, 2014). La reforma emprendida por la Unión Europea frente a la crisis se encontraba fundamentada en: el fortalecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la constitucionalización del fondo de rescate, el control de los

²⁴ Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, por sus siglas en inglés.

productos financieros detonantes de la crisis y la articulación de una nueva estrategia socioeconómica (Bárcena, 2011:143).

La República Helénica fue el centro de ejecución de los denominados Programas de Ajuste por parte la Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, instituciones que se mostraron en la palestra pública como ‘solidarias’. No obstante, ello contrasta con el condicionamiento de establecer medidas de austeridad y rescate para obtener los desembolsos. La solidaridad es concebida por parte de la Doctrina Social de la Iglesia como un principio social y como una virtud moral que exige el reconocimiento de la libertad humana para el bien común en medio de los vínculos que unen a los hombres. En sí, esta constituye un principio ordenador de las instituciones y una virtud moral como determinación firme y perseverante que busca el bien común. De hecho, los principios de ‘solidaridad’ y del ‘bien común’ se encuentran estrechamente relacionados, para lo cual es importante la conciencia de la deuda que tiene cada ser humano con la sociedad. Es así que el ser humano como deudor de las condiciones que facilitan la existencia humana, abre el camino para las generaciones presentes y futuras por medio de actuaciones sociales para saldar la deuda (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2004: 192 - 196).

De hecho, al no contar ya con préstamos de inversores extranjeros, el 2 de mayo de 2010 el Fondo Monetario Internacional y los Ministros de Finanzas de la Zona Euro destinaron 110 000 millones de euros como paquete de préstamos de emergencia en dividendos entre mayo de 2010 y junio de 2013 para Grecia (Comisión Europea, 2014). El pago de estos dividendos dependía de la aplicación de reformas en las finanzas públicas y la política económica del país heleno. Para llevar a cabo dichas tareas, la Comisión Europea designó un grupo de expertos. Entre dichas medidas, afirma la Comisión Europea, se habría invertido en construcción para la generación de empleo y crédito a las pequeñas empresas. Una reforma trascendental habría sido además la agilización burocrática del país heleno y la eficacia de la administración fiscal. Ello será, sin embargo, contrastado en subcapítulos posteriores.

Al respecto es preciso mencionar que Marcel Mauss (citado en Kowalski, 2011:190), en su obra “Ensayo sobre el don. La forma y la razón del intercambio en las sociedades arcaicas”, establece que el ‘don’ es aquello que inserta a los individuos en una entidad concreta más grande. El ‘don’ se encuentra caracterizado por la no equivalencia, es decir que no existe un precio o una forma similar de retribución - pues esto lo anularía - sino únicamente una deuda simbólica que desembocaría en el ‘contra don’ que debe ser diferente y diferido. Esta inexistencia de temporalidad en el ‘don’ no contempla la inmediatez y permite la creación de relaciones a largo plazo. En este sentido se establece que el ‘don’ es primario en las relaciones sociales por lo que, a diferencia de las transacciones, no constituye un complemento del mercado. De hecho, el receptor de un ‘don’ debe tener la capacidad de participar en la relación para que la lógica del ‘don’ sea honesta.

En este contexto, el salvataje económico de la Unión Europea a Grecia se da con el fin de lograr el sostenimiento del sistema financiero de la Unión Europea, para lo cual establece nuevos organismos de control bajo los que deben regirse los Estados miembros. A través de la teoría del ‘don’ propuesta por Mauss (en Kowalski, 2011:190), esta realidad puede ser analizada de la siguiente manera: La entrega de sumas de dinero a Grecia no se enmarca únicamente en una transacción de dinero a manera de préstamo, sino que se enmarca en los términos de ‘ayuda’ y ‘solidaridad’. En este sentido, Grecia recibe un ‘don’ por parte de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Fondo Monetario Internacional, y ya que el ‘don’ carece de equivalencia y temporalidad, el ‘contra don’ con el que este país responde es la aplicación de los Programas de Ajuste Económico, cuyas implicaciones trascienden de la esfera económico-financiera a la esfera social y política. Sin embargo, como se presentará más adelante, este ‘don’ puede ser interpretado como un ‘don venenoso’. Es decir que en el trasfondo de este ‘don’, se encuentra un interés, en relación a la propuesta de Gronemeyer (en Sachs, 2010:55-56), que se verá más adelante.

El objetivo de los programas de Ajuste de sostener el sistema financiero de la Unión Europea, más que el de la soberanía del Estado, podría interpretarse, acorde al teórico de la postmodernidad, Bauman (2000:10), como la

‘evaporización’ del Estado – nación, y la ‘solidificación’ del sistema económico y financiero que se vuelve el nuevo rector de la sociedad. De hecho, como se verá más adelante, las medidas de los Programas de Ajuste se centran en la desregularización, la liberalización y la flexibilización del mercado, y la privatización de las empresas públicas estatales, con el fin de que el Estado tenga menor control sobre la política económica. Este proceso de ‘licuefacción’ del Estado y ‘solidificación’ del sistema económico y financiero desata a dicho sistema de cualquier responsabilidad local. Como resultado de esto, se identifica que la modernidad es ‘líquida’, pues al no contar con instituciones sociales sólidas, esta está marcada por la incertidumbre respecto al futuro.

La ‘solidificación’ del sistema económico y financiero como rector, que suple al Estado, en el caso de la Unión Europea, podría identificarse a través de la institución de los siguientes mecanismos de control. El Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea acuerda la creación de la Junta Europea de Riesgos Sistémicos y el Sistema Europeo de Supervisión Financiera. La Junta Europea de Riesgos Sistémicos queda creada el 24 de noviembre de 2010 bajo el Reglamento (UE) N° 1092/2010 con el fin de supervisar el Sistema Financiero de la Unión Europea, prevenir y atenuar los riesgos sistémicos que afecten la estabilidad financiera (Europa, 2011). El Sistema Europeo de Supervisión Financiera, conformado por la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, y la Autoridad de Valores y Mercados, queda creada el 24 de noviembre de 2010 bajo los Reglamentos (UE) N° 1093/2010, 1094/2010, y 1095 respectivamente (Maier, 2014)²⁵.

Con la creación de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, se establecen los gestores de las medidas socioeconómicas que Grecia debe ejecutar: el FMI y Alemania, el mayor contribuyente de los fondos, en los cuales Grecia no tienen ninguna participación. Así, en este panorama, la FEEF es acordada por los países miembros de la Eurozona el 9 de mayo de 2010 y entra en vigor el 7 de junio de 2010 como compañía con sede en Luxemburgo bajo la ley del mismo país. Esta nace con el fin de garantizar la estabilidad financiera de

²⁵ El 11 de marzo de 2014 el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la revisión del SESF.

la unión monetaria de los países miembros por medio de asistencia financiera temporal a los países miembros de la Eurozona que se encuentren en necesidad.

Como fundamento de que el ‘don’ de la Unión Europea está marcado por un claro ‘contra don’ para la misma en términos de estabilidad económica, reconocimiento político, entre otros, cabe mencionar que Marianne Gronemeyer identifica que la ayuda moderna ha transgredido la concepción tradicional de ayuda asociada a la misericordia y se ha convertido en un ejercicio ‘elegante del poder’ en favor de quien ayuda (Sachs, 2010:55-56). Por esta razón, se puede mencionar que la Aplicación de los Programas de Ajuste constituye una forma de ‘poder’ sobre Grecia, para que esta se ajuste a lo solicitado por las entidades ‘benefactoras’.

Es así que, el fondo se encontró inicialmente conformado por 250 000 millones de Euros por parte del FMI y 440 000 millones por parte de los países miembros de la Eurozona. Sin embargo, el 24 de junio los Jefes de Estado y Gobierno acuerdan aumentar a la envergadura de la actividad de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera y sus compromisos de garantía de 440 000 millones a 780 000 millones de euros, lo cual permite una capacidad de préstamo de 440 000 millones de euros (EFSF, 2014: 1). Sus actividades se encuentran respaldadas por las garantías entregadas por parte de los Estados miembros de acuerdo a la participación de cada uno de ellos en el capital desembolsado del Banco Central Europeo. La mayor participación la tiene Alemania con 29,13 % de entre todos los países de la Unión Europea, mientras que Grecia, junto a Chipre, Irlanda y Portugal no contribuyen al mismo (EFSF, 2014: 2).

2.1.2. Reformas constitucionales griegas

El Estado Heleno muestra su vulnerabilidad en primer plano en la cuestión económica y en segundo plano en su relación con la Unión Europea, a la que le ha confiado atribuciones. De hecho, Andreas Pottakis, de la Academia de Derecho Público Europeo, menciona que las medidas que se han aplicado en

Grecia constituyen una bancarrota ordenada de la *Sozialwirtschaftsverfassung*²⁶. Dichas medidas, justificadas como consecuencia de las políticas de gasto y de la desconfianza en los mercados internacionales en las instituciones griegas por su falta de transparencia, se alinearían con las directrices del Consenso de Washington para la reducción del déficit y cambio de las economías domésticas (Bárcena, 2011:137). Cabe notar que el Estado del bienestar griego y los servicios públicos más elementales han sido reformados de forma extrema por las condicionalidades político económicas establecidas por el Fondo Monetario Internacional y las instituciones comunitarias para la entrega de ‘ayuda’ financiera.

En esta línea, cabe mencionar que, según Bárcena (2011:132-133), doctor y abogado de la Universidad Autónoma de Barcelona, la pertenencia de Grecia a la Unión Europea, constituye uno de los ejes fundamentales para la comprensión de la situación griega que ha llevado al Estado a reformar su Constitución. Así, para el análisis de las reformas constitucionales en Grecia, es necesario comprender este término de ‘mutación constitucional’, el cual hace referencia a la relación entre la Constitución de un Estado y el ordenamiento comunitario. En este caso, la cobertura ‘constitucional’ de la Unión Europea ha sido ampliada en cada uno de los Estados, pues estos han trasladado parte del poder constituyente hacia instancias supranacionales. Es por ello que el proceso de integración de la Unión Europea es categorizado como una mutación constitucional de gran envergadura.

Según Bárcena (2011:139 - 140), la vulnerabilidad del Estado griego frente a esta mutación constitucional de gran envergadura y una crisis financiera auestas se hace evidente en las reformas de su Constitución que se describirán posteriormente. De hecho, cabe destacar que partes esenciales de la constitución griega han sido dejadas fuera de aplicación gracias a fórmulas jurídicas establecidas por el parlamento griego para el cumplimiento de las medidas de austeridad y rescate. Así, pues, frente a la capacidad de control directo de la economía y de la exigencia de cambios estructurales socioeconómicos por parte

²⁶ La constitución económica social de un Estado, en la que se garantiza un modelo económico y social por medio de la constitución.

de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, establecidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el Parlamento, de haber alcanzado la mayoría de tres quintos, podría haber aplicado el Artículo 28.2 de la Constitución de Grecia (2008):

Con el fin de atender a un interés nacional importante y de promover la colaboración con otros Estados será posible atribuir, mediante tratado o acuerdo internacional, competencias previstas por la Constitución a los órganos de organización internacionales, si bien se requerirá para la ratificación del tratado o del acuerdo una ley votada por mayoría de tres quintos del total de los diputados²⁷.

Tal presión llevó al Estado griego a maniobras políticas y jurídicas poco claras para limitar los poderes soberanos y permitir una intervención externa. Es así, que frente a la imposibilidad de alcanzar la aplicación del Artículo 28.2 por la falta de votos, se optó por la aplicación del Artículo 28.3 de la Constitución griega, cuya aplicación requería únicamente la mayoría absoluta, es decir del 50% más uno. Sin embargo, este contemplaba la limitación de la soberanía nacional, es así que dicho Artículo menciona que dichas “*limitaciones vengan impuestas por algún interés nacional importante, no lesionen los derechos del hombre y los fundamentos del régimen democrático y se efectúen sobre la base del principio de legalidad y bajo condición de reciprocidad*” (Constitución de Grecia:2008).

Además de esta maniobra político jurídica, se introdujo la ley 3847/2010 que establece que el Ministro de Economía solamente debe informar al Parlamento Griego sobre los tratados internacionales que firme y obliguen internacionalmente al Estado en sustitución a la ratificación parlamentaria del Artículo 1.4 de la Constitución griega. Pues, el Artículo 36,2 de la misma Constitución (de Grecia: 2008) establecería que:

No surtirán efecto hasta haber sido ratificados por una ley formal los tratados de comercio, así como los que se refieran a tributación, cooperación económica o participación en las organizaciones o uniones internacionales, y todos los que impliquen concesiones que, según otros preceptos de la Constitución, requieran reglamentación legislativa o den origen a cargas individuales para los griegos.

No obstante, dicha ley inclusive contravendría el Artículo 44.1 de la Constitución Griega referente al estado de excepción, pues ahí claramente se

²⁷ La versión en español de los artículos de la Constitución de Grecia ha sido tomada del libro “El Gobierno de la Economía en la Constitución Europea. Crisis e indeterminación institucional” de.Bárcena (2011).

indica la necesidad de ratificación de la Cámara de Diputados frente la adopción de actos legislativos urgentes por parte del Presidente de la República Helénica. (Bárcena, 2011:140)

2.1.3. Evolución de las reformas

Las políticas del Estado Heleno, con la aplicación de las medidas contempladas en el plan de ajuste, sufren un vuelco radical; de la concentración de recursos en empresas estatales, en teoría direccionadas hacia el bien común de la población por sus beneficios colectivos, no necesariamente económicos (Scannone, 2014), se pasa a la privatización. De hecho, conforme a la quinta revisión del Programa de Ajuste Económico para Grecia, de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea (2011: 32), que se llevó a cabo en octubre de 2011, se mantiene el cumplimiento de recaudar 35 000 millones de euros a finales de 2014 y 50 000 millones al final del plan de privatización, a pesar de los retrasos existentes en esta transferencia durante 2012, e inclusive se pronostica que los ingresos por privatizaciones puedan superar los mencionados valores gracias a la recapitalización de los bancos por parte directa del Estado o del Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helena. No obstante, se insta al gobierno griego a cumplir su compromiso con el objetivo de privatización, el cual constituye un eje crucial en el programa de ajuste, para lo cual se llama a una venta mayor de acciones de las empresas estatales, de lo antes prevista, de ser necesario.

En cierto sentido, la población es categorizada como responsable de la inestabilidad financiera, por lo que debe contribuir con impuestos, en favor del ‘bien común’. Es así que, en el mismo documento de la quinta revisión del Programa de Ajuste Económico para Grecia, sobre la reforma fiscal se destaca la importancia del programa de lucha contra la evasión de impuestos (el cual no ha tenido resultados satisfactorios) no solamente por los ingresos que generaría, sino porque ayudaría a la aceptación social del programa de ajuste. Además, se estableció la importancia de una preparación adecuada para la revisión del sistema fiscal, pues la reducción de tarifas, en especial de impuestos indirectos, no habría sido adecuada en aquel momento. El gobierno griego buscaba

entonces una reforma del sistema tributario por medio de la ampliación de bases impositivas, la abolición de exenciones y la aplicación de regímenes especiales para los impuestos al ingreso corporativo y el IVA (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, 2011: 33-34).

La administración de entes estatales, a cargo de los gobiernos locales, empezó a ser reformada de acuerdo a entidades supranacionales. De hecho, sobre las reformas de la administración pública se destaca el informe de la secretaría de la OCDE, previo a la aplicación de medidas de austeridad y rescate, el cual incita a una mayor coordinación entre los Ministerios, aplicación y vigilancia de políticas coherentes, establecimiento de orientaciones y prioridades estratégicas, la reducción del formalismo, entendido como burocracia, la reducción de puestos jerárquicos y de dirección y el control sobre la formulación del presupuesto. Con este fin, el gobierno, junto a los asesores técnicos, se comprometió a la reducción, fusión o cierre de funciones superpuestas que existían en entidades con exceso de personal. La Secretaría de la OCDE también preparó un informe específico sobre los programas sociales, cuyas conclusiones se refirieron a los altos niveles de fragmentación en la distribución y uso de programas sociales. Así, pues se recomienda aumentar la eficiencia y ahorrar dinero en programas sociales (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, 2011: 33-34).

A tal punto, el Estado Griego se ha convertido en un simple ejecutor de medidas establecidas por entes externos que han socavado no únicamente los factores que entorpecen el normal funcionamiento, sino el sistema en sí mismo. Es el caso del sistema de salud, que ha sido considerado uno de los sectores de gran importancia para las reformas de ajustes, pues este absorbía grandes proporciones del gasto público. Es así que el informe establece la necesidad de reducir el personal administrativo y médico, la concentración y especialización de hospitales y departamentos, el establecimiento de tarifas de los medicamentos, el aumento sustancial de medicamentos genéricos en hospitales y servicios de consulta externa, la aplicación de guías clínicas conectadas con la aplicación de la receta electrónica y la eliminación de atrasos en los pagos. Así mismo, entre estos sectores estratégicos para la reducción de costos se encuentra

el sector educativo en el que la misión identifica como retos a ser resueltos la centralización del sistema educativo, el tiempo de trabajo del profesor (menor al de otros países europeos), la falta de evaluación externa y las excesivas restricciones a las escuelas privadas (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, 2011: 34-35,39).

Es necesario notar que la cesión de competencias que ha hecho el Estado Heleno, en el trasfondo, no ha sido necesariamente a un ente supranacional que entre a regular y corregir errores operativos, sino a una mayor ‘solidez’ del sistema económico de mercado basado en la flexibilización y la liberalización del mercado, según el planteamiento teórico de Bauman (2000). Por ejemplo, la flexibilización del mercado laboral, en el que el gobierno ha direccionado sus políticas hacia la negociación colectiva de salarios. Así se planteó la suspensión de la extensión de los convenios colectivos laborales y sectoriales por lo menos hasta fines del 2014 con el fin de que los empleadores y empleados acuerden la fijación de salarios. También se cortó la cláusula de favorabilidad con el fin de que los acuerdos a nivel empresarial prevalezcan sobre los sectoriales. Además se favoreció el ‘derecho’ de negociar convenios colectivos a nivel empresarial, sin recurrir a los sindicatos. Como objetivo último, estas medidas se direccionaron hacia la construcción de un acuerdo nacional tripartito para aumentar la competitividad, el crecimiento y el empleo. De esta manera se ha dejado en debate los sueldos, los salarios mínimos, el convenio colectivo nacional, los costes laborales no salariales y las contribuciones sociales (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, 2011: 35-36).

2.2. Paquete de 2012

A continuación, con el fin de describir el Segundo Programa de Ajuste Económico para Grecia como evidencia de la intervención directa de los entes supranacionales en la gestión del ya vulnerado Estado Heleno, se presentará el proceso de su aprobación en el contexto de evaluación general del Primer Programa y el planteamiento de la necesidad del Segundo según la visión de la

‘troika’²⁸. Posteriormente se presentarán las reformas económico-financieras y sociales, en las que se identificarán la prioridad de reducir el rol del Estado en la economía y fomentar el del libre mercado. De esta forma, el presente subcapítulo adquiere importancia al presentar los resultados de la Cuarta Revisión del Segundo Programa de Ajuste Económico para Grecia, permitiendo un avisoramiento de las reformas iniciadas en el primer programa y profundizadas en el segundo como fundamento de la vulnerabilidad de Grecia frente a las entidades supranacionales para la liberalización de la economía.

2.2.1. Aprobación del Paquete de 2012

El Primer Programa de Ajuste es calificado como positivo y la actuación del Estado griego es condenada como ineficiente para la aplicación del mismo, por lo que se abre la necesidad de un segundo programa a ser aplicado en su totalidad, como condición para continuar con la ‘ayuda’ financiera. Así, pues, la denominada misión de la ‘troika’, conformada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, mantuvo reuniones con las autoridades griegas entre el 17 de enero y el 9 de febrero de 2012 en Atenas. Es esta reunión se establecieron los términos y condiciones del Programa de Ajuste Económico y discutieron el paquete de políticas que serían la base para la aplicación de un futuro programa de ayuda. En aquella sesión se calificó como “positivas” aquellas medidas direccionadas hacia la independencia de la economía de Estado y como “negativo” a aquello que ha obstaculizado tal proceso. Al respecto, las conclusiones de estas reuniones podrían ser categorizadas en dos partes: la primera en la que muestran los “beneficios” del Programa de Ajuste Económico para Grecia y las “ineficiencias” del Estado Griego en la aplicación de reformas y la segunda en la que muestra la ‘necesidad’ de un Segundo Programa de Ajuste Económico para Grecia con el fin de ampliar o dar continuidad a las medidas liberalizadoras (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, 2012: 1).

²⁸ La ‘troika’ hace referencia a la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

Así, el informe, en su conjunto, propicia la radicalización del discurso para la aplicación de las denominadas medidas de austeridad y rescate, y la culpabilidad del Estado de las deficiencias del Programa. En primera línea, se destaca la reducción del déficit general del Gobierno de un 15,75% del PIB en 2009 a un 9,25% del PIB en 2011 y los procesos de reducción de pensiones y de aumento de la privatización. Sin embargo, se determina la inestabilidad política, el malestar social y los problemas de capacidad administrativa, junto a una recesión profunda, como factores que obstaculizaron la implementación del programa. En segunda línea, se establece que Grecia será incapaz de volver a la financiación del mercado hasta 2015, un factor clave para la economía mundial de mercado. Por lo que, para impulsar el crecimiento, un segundo programa debe contar con reformas estructurales direccionadas, al igual que el primer programa, hacia la estabilidad financiera y el mejoramiento de la competitividad. Sin embargo, el Segundo Programa de Ajuste establece la necesidad de aplicar el programa de forma global (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, 2012: 1-2).

En base a lo antes mencionado, el direccionamiento de las entidades supranacionales para con Grecia hacia la aplicación de un nuevo Programa de Ajuste como contrapartida a la entrega de préstamos se concretiza. Según la ‘troika’, al haber respondido “positivamente” el Estado griego a las reformas establecidas en 2010 a cambio del paquete de préstamos de emergencias, se aprueba una segunda asistencia económica el 14 de marzo de 2012 por parte del FMI y los Ministros de Finanzas de la Zona Euro de 164 500 millones de euros; 144 700 millones provenían del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera creado en 2010, y 19 800 millones del FMI, los cuales son parte de la Facilidad del Fondo Extendido para Grecia de 4 años por un monto de 28 000 millones de euros, aprobado por el FMI en marzo de 2012. Estos nuevos préstamos, al igual que los anteriores, serían entregados en dividendos entre marzo de 2012 y diciembre de 2014 conforme la aplicación de reformas a la economía helena. (European Comission, 2014).

Las reformas sin embargo no estuvieron concentradas únicamente en los Programas de Ajuste sino que con el fin de “mejorar”, según la Comisión

Europea (2014) la sostenibilidad de la deuda griega, se acuerda no únicamente aplicar la segunda asistencia económica, sino también permitir la participación del sector privado. Es así que, como consecuencia de la alta participación en la oferta de cambio de deuda griega en la primavera de 2012, el 95,7% de bonos elegibles fueron intercambiados, lo cual correspondería a 197 000 millones de euros, de los 205 600 millones de euros de deuda (European Comission, 2014). En noviembre del mismo año las instituciones prestamistas, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el FMI, establecen la reducción del coste de los préstamos y la ampliación del tiempo de reembolso.

2.2.2. Reformas económico financieras

La previsión de reformas económico-financieras en Grecia lleva a un proceso de inestabilidad social y política dentro del Estado, el cual, sin embargo, respondió con un manejo de su política interior en base y en favor a los planteamientos externos por parte de la Unión Europea. Es así que durante la primavera de 2012, la aplicación del programa de ajustes que condiciona los desembolsos se enfrentó a la inestabilidad política por las elecciones, lo que genera incertidumbre frente a la capacidad de Grecia para llevar a cabo dicho programa y la salida de capitales. No obstante, el 17 de junio del mismo año se produce un gobierno de coalición de los partidos PASOK, ND e Izquierda Democrática que establece como mandato el aseguramiento de Grecia en la Eurozona, por lo que determina la aplicación del programa de ajuste económico. Así, el nuevo gobierno, concentró sus esfuerzos en ponerse al día con las medidas necesarias para continuar con el plan de ajuste. Sin embargo, la mencionada fricción política influyó en el tiempo, puesto que provocó retraso en los desembolsos de los prestamistas internacionales (European Comission, 2014).

La primacía de los asuntos económicos y financieros, en su reforma estructural como administrativa para captar más fondos, por encima de los asuntos humanos y sociales continuó en el segundo programa. De acuerdo a la cuarta revisión del Segundo Programa de Ajuste Económico para Grecia, de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión

Europea (2014:25), las medidas se han direccionado hacia la mejora de la administración tributaria y en menor grado hacia las reformas de la administración de la seguridad social. Por lo que se ha evidenciado la primacía del resguardo del sistema financiero. No obstante, a partir de agosto de 2013 se han emprendido medidas tanto para reformar la seguridad social como para aumentar la recaudación de las contribuciones por este concepto. Entre estas medidas se encuentran el aumento de sanciones y cargos para quienes cuenten con trabajadores no declarados, la verificación cruzada de datos administrativos, la implementación de una declaración obligatoria de contribuciones por algunas pensiones complementarias y de suma fija y los recordatorios a los empleadores.

El Segundo Programa de Ajuste Económico continuó con el proceso de privatización con el fin de disminuir en lo máximo posible la intervención del Estado en los diferentes sectores económicos en favor de las empresas privadas y el libre mercado. Así, se recaudó, por ejemplo, 133 millones de euros por las Loterías del Estado, 622 millones de euros por la Organización Griega de Pronósticos de Fútbol, 187 millones de euros por la operación de transmisión de gas DESFA. De igual forma en el proceso de privatización se encuentran el operador ferroviario, el proveedor de servicios de ferrocarril y los aeropuertos regionales. En caso de seguir esta tendencia privatizadora, se calcula que los ingresos alcanzarían en 2020 los 22 300 millones de euros. De hecho, la cuarta revisión del Segundo Programa de Ajuste Económico para Grecia establece la necesidad de profundizar la privatización de bienes raíces, para lo cual se establece la transferencia de 1000 activos inmobiliarios al Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helénica (HRADF) (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, 2014:26-27).

2.2.3. Reformas sociales

Como se ha mencionado antes, las reformas no se han direccionado hacia cambios de eficiencia y mejora del Estado de Bienestar, sino a un desmantelamiento del mismo, más acorde a las políticas de la Unión Europea. Por ejemplo, en el área de la salud, se ha optado por la centralización para la adquisición de bienes y servicios médicos. Pues se ha continuado con la

consolidación de las ramas de la seguridad social en un único fondo de seguro de asistencia sanitaria, ejemplo de ello es la Organización Nacional para la Prestación de Servicios de Salud (EOPYY), la cual se ha convertido en el único comprador de servicios de salud para transferirlos posteriormente al servicio Nacional de Salud (ESY). En esta línea, se ha continuado con la fijación de precios de medicamentos tanto no genéricos como genéricos, cuyos precios en Grecia son considerados elevados con respecto a otros países de la Unión Europea. Los medicamentos genéricos además no han superado el 18- 20% de consumo, por lo que las autoridades han establecido un 60% de prescripciones genéricas para los médicos. Para reducir aún más los ‘gastos’ en medicamentos, desde enero de 2014 las autoridades han establecido un límite de gastos y un presupuesto de receta efectiva por médico, la cual no puede superar el 80% de valor de la prescripción del año pasado. Esto evidencia la prioridad en reducción de gastos frente a la salud pública. (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, 2014:40-43).

El Programa de Ajuste tiene en sí como fin salvaguardar el sistema económico y financiero, por lo que sus medidas, inclusive aquellas que aparentemente buscan alcanzar una mejor eficiencia en los procesos, no se ajustan a la realidad social de los griegos. Es así que, con la aprobación de la Ley 4052/2012 se introdujo una nueva fórmula de cálculo de pensiones que, en primer lugar, permita reducir la diferencia entre las diversas categorías de la población y, en segundo lugar, garantice la sostenibilidad futura del sistema. Además, varios fondos de pensión se fusionaron en un fondo único denominado ETEA con la mencionada Ley. En este sentido, la cuarta revisión del Segundo Programa de Ajuste Económico para Grecia menciona la necesidad de modificar la legislación para asegurar la aplicación de la nueva fórmula de cálculo a todos los fondos fuera de ETEA y fusionar todos estos a ETEA con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema. Así, pues, se han direccionado las medidas a eliminar el déficit existente en los fondos de pensión (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, 2014:43-44).

La aplicación de medidas en favor de la liberalización del mercado y del capital se hace evidente en el mercado laboral, pues, como consecuencia del

primer y segundo programa de ajuste, los costes laborales han caído abruptamente, pues, la flexibilidad salarial ha llevado a la competitividad de costes. Para continuar con este proceso para el 2014, de hecho se previeron la racionalización de los requisitos de información laboral y la reducción en la contribución de la seguridad social. Con respecto a este último punto, desde julio de 2014 la contribución de la seguridad social se redujo en 3,9%, especialmente para el empleador con 2,9 % con el fin de reducir los costes laborales. Además, en junio de 2014, el gobierno ha iniciado una evaluación de mejores prácticas, en el marco de las relaciones laborales entre las industrias y operaciones sindicales, para la creación de empleo e inversión que salvaguarden el derecho al empleo y promuevan las relaciones constructivas entre las partes, con el fin de evitar perturbaciones innecesarias en las empresas (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, 2014:47-48).

A pesar de que la cuarta revisión del Segundo Programa de Ajuste Económico para Grecia de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea (2014:44) destaca los procesos de reforma del sistema educativo de Grecia direccionados hacia la eficiencia, dichas reformas se enmarcan en la reducción de costos como criterio principal y no en criterios propios de una educación de ‘calidad’ del país. El mismo informe señala que se ha racionalizado la red escolar, se ha aumentado el número de estudiantes por aula y las horas clase de los profesores. Los cambios legales en favor de la transferencia obligatoria de empleados han reducido el número de profesores temporales de 15 000 en el periodo 2011- 2012 a 2 000 en el periodo 2013- 2014, lo cual ha reducido significativamente la masa salarial, destaca el informe, conforme a los acuerdos. En referencia a la educación superior, de igual manera, se menciona una urgente evaluación sobre el impacto presupuestario, la asignación de personal y la calidad de educación como base para nuevas medidas de racionalización.

2.3. Consecuencias

Tras la presentación de los Programas de Ajuste Económico para Grecia de 2010 y 2012, con el objetivo de analizar sus consecuencias en la sociedad

griega para demostrar su vulnerabilidad frente a las medidas de austeridad y rescate que pudieron ser efectivas gracias al sistema político y económico vigente de la Unión Europea, se analizarán a continuación los siguientes puntos: En primer plano se describirán las consecuencias económicas de la aplicación de las medidas de austeridad y rescate en el marco de las formas de resistencia a dichas medidas gubernamentales a las que el Estado no tiene la capacidad de dar respuesta sólida fuera de la represión. En segundo plano se presentarán las consecuencias sociales como signo del desequilibrio entre la economía formal y la forma de vida de la población y, en tercer plano, las consecuencias políticas desde el análisis de las protestas como argumento de la inestabilidad del Estado fundado en la legislación europea. De ahí que, la importancia de este subcapítulo radica en el análisis sociopolítico de las protestas y formas de resistencia que acarrearón las denominadas medidas de austeridad y rescate como imágenes de la vulnerabilidad del Estado heleno frente a la Unión Europea, y el análisis sobre una posible ‘falsa’ ‘solidaridad’, en el marco de la ayuda de estos actores.

2.3.1 Resistencia a las medidas de austeridad y rescate

En el marco de la teoría del ‘don’ (Kowalski, 2011:190), como ya se explicó anteriormente, las denominadas medidas de austeridad y rescate podrían concebirse como un ‘contra don’. Por este motivo, esta lógica del ‘don’ puede enmarcarse en la definición de ‘ayuda interesada’ presentada por Gronemeyer (Sachs, 2010:55-56). De hecho, la respuesta a esta ‘ayuda interesada’ es la resistencia a las medidas contempladas en los Programas de Ajuste por parte de la población. En este contexto, se podría mencionar la percepción de un ‘don venenoso’ detrás de esta ‘solidaridad’ por parte de la población griega. Esta percepción de los Programas de Ajuste dio como consecuencia múltiples formas de resistencia a las medidas, las cuales se describen a continuación.

Una de las medidas que tomó el gobierno socialista de Grecia en 2010 fue la de abrir los denominados negocios y profesiones cerradas, por medio de la concesión de nuevas licencias, y el cerrar determinadas profesiones y negocios por medio de la negación de nuevas licencias. Este hecho provocó que varios gremios de trabajadores se manifestaran de diversas formas contra las medidas

tomadas. Tras la apertura de nuevas licencias para camiones, por ejemplo, los propietarios de camiones en el otoño de 2010 tomaron como medida el estacionamiento de sus camiones a lo largo de las principales carreteras nacionales y avenidas principales de las ciudades, lo que provocó la afectación del tráfico, ya grave de por sí en Grecia.

El Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública la Universidad de Atenas Sotiropoulos (2013:7), frente a la medida de transferir el personal del transporte público estatal a otras empresas públicas, los choferes públicos, en los inviernos de 2010 y 2011 se declararon en huelga en determinados días de la semana. Las normas restrictivas de concesión de licencias por parte del gobierno tocaron al gremio de taxistas, pues no se concederían más licencias de taxi. La forma de responder de este gremio fue obstaculizando el tráfico en los centros de las ciudades y los accesos a puertos y aeropuertos. Inclusive en el puerto de Pireo, los taxistas derramaron aceite evitando la movilización de buses con turistas de cruceros. El plan del gobierno de conceder licencias para la apertura de nuevas farmacias, llevó a que los farmacéuticos cerraran sus negocios unos días a la semana, lo que provocó la creación de filas de personas fuera de estos negocios.

En consonancia con el anterior análisis, es necesario mencionar que, además de percibir como negativo el ‘don’ que Grecia recibía del FEEF y del FMI y desproporcional el ‘contra don’ que se ofrecía por esta ‘ayuda’, la población se sintió excluida de los acuerdos entre Unión Europea y la clase dirigente del Estado. Este sentir provocó el rechazo a las medidas dictadas por el gobierno, lo cual fue percibido por la Unión Europea como un estado de vulnerabilidad del Gobierno frente a su pueblo. A continuación se presentan algunos ejemplos de los antes descrito.

Frente a las medidas de aumento del precio de tickets de bus en otoño de 2010 por parte de las empresas de transporte público de Atenas y Tesalónica, se incitó, tanto por el denominado movimiento ‘no pagaremos’, sobre el que se detalla más adelante, y por los partidos de izquierda, a utilizar el servicio sin pagar. Sin embargo, se desconoce el número de personas que se acogió a esta

medida. En respuesta, a la medida de aumentar el peaje en las carreteras nacionales en la misma época, por parte de las empresas privadas de mantenimiento de las mismas, alrededor del 15% de los conductores que utilizaron las carreteras nacionales se negaron a pagar el peaje; cifra que disminuyó hasta 8% en febrero de 2011. En este sentido, se destaca que entre el 30 y 45 % de los camioneros se negaron a pagar de igual forma el peaje (Sotiropoulos, 2013:8).

Otro caso fue la ocupación de edificios públicos, que constituyó una de las formas de protestas que aumentó de magnitud. Aunque aisladamente estas ocupaciones no sobrepasaron algunos días, la duración total de estas fue desde febrero hasta octubre de 2011. Es así que, frente a los recortes salariales y de pensiones, no únicamente hubo movilizaciones de los sindicatos de la función pública, sino que los empleados públicos ocuparon los edificios de los Ministerios de Finanzas, de Salud, de Trabajo y de Desarrollo en Atenas, al igual que los campus de universidades. Estas medidas culminaron antes de noviembre de 2011 cuando el gobierno del PASOK de Papandreou entregó el poder a la coalición tripartita del PASOK, LAOS y ND, llevada por Papademos (Sotiropoulos, 2013:8-9).

La vulnerabilidad del Estado frente a sus legítimos mandantes democráticos, el pueblo, se hizo más evidente cuando estos empezaron la ruptura con todo tipo de autoridad estatal. Por ejemplo: entre 2010 y 2011, como respuesta a la instalación de una planta de manejo de residuos en Keratea, un pueblo ubicado al sureste de Atenas, los habitantes resistieron a esta medida abriendo una profunda zanja en la carretera principal que pasa cerca de la localidad y levantando barricadas para impedir el acceso al pueblo. Estas medidas provocaron el cierre de la circulación entre Atenas y la parte sureste de la región de Attica. De igual forma, entre 2012 y 2013, los pobladores de Skouries de la prefectura norteña de Halkidiki, en oposición a la apertura de una nueva operación minera de oro por parte de una compañía privada, levantaron barricadas, bloquearon el acceso a su pueblo y apoyaron a un grupo que invadió la propiedad de la compañía e incendió los tractores y la maquinaria (Sotiropoulos, 2013:9).

Las manifestaciones sociales fueron aquellas que más claramente mostraron su rechazo a la ‘intervención’ de la Unión Europea en Grecia por medio de los Programas de Ajuste, que fueron considerados una forma de sometimiento al pueblo griego. De hecho, esta visión de la población sobre los Programas de Ajuste, coincide con la concepción de ‘ayuda’ de Marianne Gronemeyer (Sachs, 2010:55-56) anteriormente descrita. Es así que entre los diferentes movimientos sociales que surgieron tras la crisis, el movimiento de los ‘indignados’, que se inicia en España, ha constituido uno de los de mayor visibilidad según Sergi, Vittorio y Markos Voyatzoglou (citado en Flesher y Cox, 2013:220). El movimiento de los indignados de España se habría transferido a Grecia en mayo de 2011 cuando en una de las protestas de Madrid se sostenía una pancarta que decía: «estén tranquilos, los griegos están dormidos”, por lo que enseguida aparecieron movimientos similares en Tesalónica y Atenas que se reunieron frente a la plaza del Parlamento Griego, en donde acamparon hasta julio del mismo año. En consonancia, el surgimiento de este movimiento respondería a la pérdida de total confianza en los partidos, el trabajo de los sindicatos y los medios de comunicación. De hecho, según Georgiadou (citado en Kollias, 2012), profesora asociada de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas e Historia, Universidad Panteion, que aquellos que participan en estos movimientos creían que los canales de expresión y participación política se encuentran cerrados y el gobierno había dejado de escuchar a la gente.

En sí, el Estado griego evidenció su vulnerabilidad no solamente al ceder frente a las presiones de la Unión Europea, sino en los procesos a los que se apegó su población a manera de rechazo. Por ejemplo, el movimiento ‘no pagaremos’, que nace como respuesta a las medidas de elevación de precios respecto a la movilidad y la propiedad territorial entre 2010 y 2011, antes mencionadas, toma impulso en otoño de 2010. Aunque el movimiento nació de forma espontánea, tuvo una gran cobertura mediática y se extendió a lo largo del país gracias al apoyo que le brindaron los partidos de oposición, especialmente aquellos de izquierda, los cuales motivaron masas de descontento después de 2010. Cabe mencionar que, aunque viajar como polizone, es decir sin pagar el

ticket, en el transporte era ya una práctica popular antes de la crisis, esta práctica tomó después un tinte antigubernamental (Sotiropoulos, 2013:8).

2.3.2. Consecuencias sociales

La vulnerabilidad del Estado Heleno frente a la Legislación Europea repercutió en el pueblo que se mostró contrario a esta intromisión en su estructura social, la cual se ha configurado hasta llegar a agrupaciones políticas como canales hacia una ‘contra reforma’. De hecho, la evolución de las manifestaciones durante la crisis guardó un patrón de transición, pues en un inicio se desarrollaron movilizaciones no partidistas alentadas por los sindicatos de trabajadores y movimientos sociales contra los paquetes de medidas de austeridad, que, conforme avanzaba el tiempo y la crisis, dieron paso a las movilizaciones organizadas por los partidos de oposición, que fue cuando más crecieron, según Sotiropoulos (2013:10). Este fenómeno se habría presentado por tres razones: en primer lugar, existió fatiga en los participantes, no afiliados a partidos políticos, de las primeras manifestaciones al ver su escasa o nula influencia en las políticas del gobierno. En segundo lugar, las personas se concentraron en las estrategias personales para hacer frente a las medidas de austeridad. En tercer lugar, los movimientos sociales no duraron mucho tiempo como consecuencia de la carencia de recursos, liderazgo y disciplina de una organización política.

Para el pueblo griego, la aplicación de los Programas de Ajuste y Rescate constituyó la muestra de la fragilidad de su Estado frente a la Unión Europea y la vulnerabilidad del pueblo frente al Estado Griego. En efecto, los investigadores Koussis y Costas (2013) identifican que en Grecia se han realizado 31 protestas de manera consecutiva durante 24 meses, entre 2010 y 2012. De estas, 24 estaban direccionadas por sindicatos de trabajadores y movimientos sociales que se oponían a las medidas de austeridad implantadas por el gobierno, mientras que las 7 restantes tenían como fin la conmemoración de hechos pasados. Tanto las movilizaciones sociales como las movilizaciones de los partidos de oposición tuvieron sus picos más álgidos justamente frente a los planes de medidas de austeridad. Así, pues, se identifican tres puntos: el primero en mayo de 2011

cuando el gobierno presenta el ‘programa de estrategia fiscal para mediano plazo 2013 –2016; el segundo en septiembre y octubre de 2011 cuando el gobierno se encontraba presupuestando un programa de austeridad presupuestaria para 2012 y 2013. El tercero en enero y febrero 2012 cuando el gobierno anunció la aplicación de más medidas de austeridad.

La situación de inestabilidad social como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad y rescate llevaron a la ejecución de iniciativas anarquistas como salida frente a tal presión. En sí, las protestas sufrieron un trastorno tras el acuerdo entre Grecia y sus acreedores conforme al primer paquete de rescate, pues estas tomaron un carácter más violento. En este sentido, Sotiropoulos (2013:7) identifica que existió un traspaso de la movilización democrática legítima a la actividad criminal, pues manifestantes de un grupo anarquista incendiaron un banco en mayo de 2010, en el cual tres empleados perdieron la vida. Este hecho que quedó impune constituyó una confirmación de un Estado débil, incapaz de manejar o responder a la protesta social.

En sí, el Estado griego no ha sido lapidado únicamente por parte de la Unión Europea, sino que, a partir de este hecho, ha sido golpeado por parte de los sectores sociales y el pueblo en general. De hecho, el profesor Sotiropoulos (2013:7), frente a estas formas de resistencia de los grupos afectados, que se detallan en el título siguiente, a los cambios de asignación de regulaciones que gobiernan ciertos nichos del mercado griego, determinó la existencia de una transgresión a los límites habituales de los conflictos laborales. En base a esto, también señaló que el Estado no solamente fue incapaz de manejar la crisis económica, sino también se mantuvo reacio a abordar la discusión sobre un nuevo contrato social entre el Estado y la población. De esta forma, la protesta se hubiera gestionado de forma diferente a los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas especiales de la policía. Es así que, la acción cívica se concentra en el surgimiento de movimientos sociales agrupados por edad y profesión. Además la oposición al gobierno no se la hace por homogeneidad, sino por razones diversas (Sotiropoulos, 2013:7-8).

2.3.3. Consecuencias políticas

Los efectos de la ‘evaporización’ del Estado griego frente a un sistema económico amparado por una entidad supranacional como la Unión Europea habrían sido direccionados hacia la clase gobernante como responsable o culpable de dicho fenómeno, por lo que un cambio de la clase dirigente sería la alternativa a la que se habría enrumbado el pueblo. En efecto, desde finales de 1980, - época de la democracia griega post autoritaria - había existido una apatía política en los ciudadanos griegos, según Dimitri Sotiropoulos (2013:7). Sin embargo, durante el periodo 2010 – 2013, varios grupos de ciudadanos, afectados por la subida de impuestos, por los recortes salariales o ambos, se inmiscuyeron en la protesta en las ciudades griegas. Es así que las masivas protestas registradas en mayo de 2010, junio de 2011 y febrero de 2012 son consideradas el despertar político del pueblo griego. En esta línea cabe indicar que los dos partidos tradicionales griegos, ND y PASOK, en las votaciones parlamentarias de mayo y junio de 2012, perdieron la mayoría de sus votantes, lo cual mostró un cambio de preferencias políticas de los ciudadanos.

En este caminar del pueblo griego hacia la reconstrucción de un Estado renovado, sin embargo, se presentan marcadas tendencias hacia el ‘europeísmo’ y el ‘nacionalismo’ en sus diferentes matices y convergencias por lo que se buscan nuevas alternativas políticas. Dimitri Sotiropoulos (2013:9) analiza que, a lo largo de la crisis, se ha identificado polarización en la cultura política griega, la cual se ha centrado en el enfrentamiento entre la ‘derecha’ y la ‘izquierda’. Sin embargo, esta polarización habría tenido sus raíces en la guerra civil previa a la ruptura de la democracia de 1967 y habría continuado hasta 2012 tras la restauración de misma en 1974 por medio del enfrentamiento entre los partidos PASOK y ND. De hecho, entre 2010 y 2012 la política se habría desenfocado del intercambio racional de ideas en favor de ataques personales, la propagación de falsas acusaciones, la difusión de información errónea sobre el oponente y estallidos de violencia. No obstante, la aplicación de las medidas de 2010 sería la verdadera fuente para que los ciudadanos se hayan movilizado.

La búsqueda o la manifestación de nuevas alternativas políticas se hicieron por medio de la protesta, la cual tomó nuevas características para enfrentar al Gobierno y a la Unión Europea. Cabe mencionar que en Grecia, desde la transición a la democracia en 1974, las protestas de la sociedad civil han estado direccionadas hacia el cambio en la política de ingresos (sueldos), la desigualdad en el acceso a trabajos en el sector público y las transferencias sociales. Sin embargo, en referencia a los cambios en la protesta de la sociedad civil y su retórica, Sotiropoulos (2013:7) menciona que, entre 2010 y 2013, esta ha aumentado en escala en referencia al pasado por una parte, mientras que por otra, la retórica populista tradicional, que se difundió en Grecia desde 1980 con el partido PASOK, se ha combinado con el anti-europeísmo. Es así que, la protesta, bajo los lineamientos populistas, tomó como base para su desarrollo la distinción entre la gente y las élites, tanto griegas como extranjeras. En esta base, las protestas se caracterizaron por ser pacíficas por parte de grandes sectores, y en determinados casos por el cinismo político y ataques tanto físicos como verbales contra la clase política, considerada la responsable de la crisis griega.

La vulnerabilidad del Estado Heleno frente a la Unión Europea provocó su ‘evaporización’ hasta la casi separación de este con sus mandantes y el fortalecimiento del sistema económico de mercado. No obstante, aunque las protestas diarias de los ‘indignados’ fueron descendiendo hasta llegar a la desaparición del movimiento a mediados del verano de 2011, especialmente a causa de la falta de una organización común para responder a la crisis, este movimiento, según Sotiropoulos (2013:8), ha dejado como legado una forma de participación innovadora. Puesto que se practicaron diferentes formas de democracia directa como referendos locales y asambleas generales con todos los presentes. Al respecto, el movimiento de los indignados se identificó con la participación política directa como la principal forma de representación, cuestionó las etiquetas de “derecha” e “izquierda”, y así también criticó a los tradicionales partidos ND y PASOK según Georgiadou (citado en Kollias, 2012).

Tras haber descrito los Programas de Ajuste Económico para Grecia, se puede manifestar que el proceso de aprobación y aplicación de los mismos se contrapone al principio de ‘solidaridad’, pues, según el Pontificio Consejo “Justicia y Paz” (2004: 192 – 196) es necesario el servicio hacia el receptor de la solidaridad y la deuda que se tiene con la sociedad se aplica a todos los miembros de esta sin la distinción, lo cual no es evidente en la aplicación de los programas de ajuste que nacen como paquete de préstamos de emergencia (Comisión Europea, 2014) fuera de la lógica del ‘don’ caracterizado por la no equivalencia y la inexistencia de una temporalidad definida.

Las diferentes manifestaciones de resistencia, como la paralización de determinadas actividades económicas, las manifestaciones del movimiento ‘No pago’ o las protestas del movimiento de los ‘Indignados’ frente a las medidas de austeridad y rescate que solicitaban los Programas de Ajuste Económico, constituyen una reacción al ‘contra don’ establecido a cambio de los paquetes económicos. Lo cual se enmarcaría en la humillación al necesitado y la utilización del mismo por parte de quien lo ayuda, según Benedicto XVI (2009: 47). De hecho, Vassiliki Georgiadou (citado en Kollias, 2012) analiza que los miembros de estos movimientos sociales creen que los canales de expresión y participación política se encuentran cerrados y que el gobierno ha dejado de escuchar a la gente.

En consonancia, todos estos hechos apuntarían hacia un alto grado de vulnerabilidad económica y política del Estado Heleno frente a la legislación Europea vigente, ya que el Estado ha respondido primordialmente a las instancias supranacionales por medio de la aplicación de los dos Programas de Ajuste. Esta primacía de la Unión Europea sobre la población local ha traído como consecuencia la ruptura de los gobernantes con los ciudadanos. De hecho se evidenció que la clase gobernante se encontraba a favor de una ‘solidificación’ del sistema económico de mercado, en detrimento de la lógica ‘redistributiva’ (Polanyi, 1994:392) característica del Estado, por medio de las medidas de austeridad y rescate que fueron encumbradas por la coalición política de PASOK, ND e Izquierda (European Comission, 2014). Mientras que el pueblo creó organizaciones paralelas al Estado en base a la participación política

directa (Georgiadou citado en Kollias, 2012), y organizaciones para una reconstrucción renovada del Estado en base a los partidos de oposición (Sotiropoulos 2013:10).

CAPÍTULO III

DELIMITACIÓN Y EJERCIO DE COMPETENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA

“La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.” (Unión Europea, 2010:18).

Con el objetivo de: Determinar la delimitación y ejercicio de competencias de la Unión Europea según el Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea; en el tercer capítulo se presentará de manera descriptiva y analítica los Principios de Atribución, Subsidiariedad y Proporcionalidad que rigen la delimitación y ejercicio de competencias de la Unión Europea, presentes en el Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, en el que se contempla en determinado grado la intervención de la Unión Europea en la crisis económica helena. La información se presentará en tres subcapítulos, y en el desarrollo de los mismos se presentará una conceptualización de términos clave, desde los cuales se ha dado lectura a este tema y para el análisis conclusivo del presente capítulo y del conjunto de este trabajo investigativo. En este apartado, para complementar las teorías utilizadas en los capítulos anteriores se utilizará los conceptos de ‘subsidiariedad’, ‘libertad’ y ‘bien común’ de la Doctrina Social de la Iglesia propuesta por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, que de aquí en adelante estarán marcados entre comillas. La información se presentará en tres subcapítulos. El primero sobre el Principio de Atribución, en el que se presentarán las competencias atribuidas a la Unión Europea y a los Estados, y los objetivos y tratados, que no serían los únicos fundamentos jurídicos para dichas atribuciones en los casos económicos. El segundo sobre el Principio de Subsidiariedad en el que se determinará la primacía de las entidades supranacionales sobre los Estados en el ejercicio de las competencias. El tercero sobre el Principio de Proporcionalidad que permitirá, en relación a los dos principios anteriores, determinar la legitimidad de la intervención de la Unión Europea fundamentada en los objetivos comunes, pero a la vez la limitación que existiría en este sentido. Finalmente, se realizará un análisis de la información del capítulo en base a la terminología planteada con el fin de responder a la

pregunta: ¿El Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea contemplaría la intervención de la Unión Europea en la crisis económica helena?

3.1. Principio de Atribución

En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros. (Unión Europea, 2010:18).

El Principio de Atribución contemplaría en cierto grado la intervención de la Unión Europea en Grecia frente a la ‘crisis’ financiera. Es por ello que con el objetivo de determinar la delimitación de competencias de la Unión Europea y los Estados en el marco del Tratado de la Unión Europea, se analizarán en el primer punto las competencias de la Unión Europea y en el segundo punto las competencias de los Estados en base a la clasificación de las mismas en competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias de apoyo contempladas en el mencionado Tratado, en las que se notará la supremacía relativa de la entidad supranacional por su capacidad interventora en casi todas las temáticas correspondientes a un Estado. En el tercer punto, se analizarán los objetivos y tratados de la Unión Europea en el marco de la transferencia de competencias en el que se describirá como no únicamente los tratados se han consolidado como fuente jurídica de atribución. En este sentido, la importancia de este subcapítulo radica en la determinación de cierta legitimidad de la intervención por parte de la Unión Europea en Grecia no únicamente en base a los tratados, sino a la conexión de estos con los ejercicios institucionales.

3.1.1. Competencias de la Unión Europea

Para analizar la intervención de la Unión Europea en la República Helena frente a la crisis, es necesario determinar la concepción doctrinaria del principio de atribución. Con respecto a las competencias de la Unión Europea, esta, bajo la concepción doctrinal dominante del Principio de Atribución, para la adopción de un acto jurídico debe tener el fundamento jurídico correspondiente (Bárcena, 2011:63). Es decir, debe existir un tratado que le atribuya determinada

competencia. Al respecto, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea distingue tres principales tipos de competencias: las competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias de apoyo (Europa, 2010), las cuales determinaremos para indagar en el fundamento jurídico para la aplicación de los denominados Programas de Ajuste con sus medidas de austeridad y rescate.

De hecho, es importante puntualizar que el Estado Heleno ha otorgado al menos un determinado grado de atribución en casi todas las temáticas a la Unión Europea por medio de los diferentes tratados, lo cual se alinea con el trasladado del poder constituyente hacia instancias supranacionales de una mutación constitucional de gran envergadura, como es categorizado el proceso de integración de la Unión Europea (Bárcena, 2011:132-133), puntualizado más profundamente en el capítulo anterior. Es así que, dentro de estos tres principales tipos de competencias, la Unión Europea adquiere participación en las tres, las cuales se describen a continuación.

En lo que refiere a la Unión Europea sobre las competencias exclusivas se encuentran ámbitos clave en el proceso de ‘superación’ de la crisis como: el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior y la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro (Unión Europea 2010:51), que en sí ya darían una base para la ‘necesidad’ de intervención de las entidades supranacionales en las políticas helenas. En el numeral 1 del Artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se menciona: *“Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, (...)”* (Unión Europea, 2010:18).

No obstante, la aplicación de las medidas de austeridad y rescate, como se presentó en el Capítulo II, contemplaba temáticas diversas del ordenamiento económico y social local. Se podría, en este contexto, interpretar una alusión a las competencias compartidas de la Unión Europea, sobre las cuales se menciona en el numeral 2 del Artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: *“Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia compartida con los Estados miembros en un ámbito determinado, la Unión y los Estados miembros podrán legislar*

y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito.” (Unión Europea, 2010:50).

De hecho, si revisamos los espacios intervenidos por medio de las medidas de austeridad descritos en el Capítulo II, notaremos que hasta cierto punto se ajustan a los principales sectores para las competencias compartidas (Unión Europea, 2010:51):

- a) el mercado interior;*
- b) la política social, en los aspectos definidos en el presente Tratado;*
- c) la cohesión económica, social y territorial;*
- d) la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos;*
- e) el medio ambiente;*
- f) la protección de los consumidores;*
- g) los transportes;*
- h) las redes transeuropeas;*
- i) la energía;*
- j) el espacio de libertad, seguridad y justicia;*
- k) los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos definidos en el presente Tratado.*

Pero las denominadas medidas de austeridad y rescate y los cambios constitucionales griegos, analizados en el Capítulo II cobrarían mayor profundidad de sentido si se analizan las llamadas competencias de apoyo. Pues, así se comprendería dicha legitimización del direccionamiento externo de las políticas helenas en diferentes temas, comúnmente considerados de orden estatal, como: la protección y mejora de la salud humana, la industria, la cultura, el turismo, la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte, la protección civil y la cooperación administrativa (Unión Europea, 2010:52-53). Es importante señalar, entonces, al numeral 5 del Artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que menciona: *“En determinados ámbitos y en las condiciones establecidas en los Tratados, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros (...)”* (Unión Europea, 2010:50).

3.1.2. Competencia de los Estados

Es imprescindible mencionar que las competencias de los Estados se originan en las constituciones nacionales (Bárcena, 2011:63). Sin embargo, el proceso de creación de la Unión Europea ha implicado que los Estados miembros transfieran competencias a las instituciones comunitarias (Rainer, Martínez y Zúñiga, 2012:73). En esta relación entre la entidad supranacional y

los Estados, estos últimos cuentan con competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias de apoyo. Esta cesión de competencias, desde una lectura de la Doctrina Social de la Iglesia, frente a la libre autodeterminación de los pueblos y la soberanía, que no serán tratados a mayor profundidad en este trabajo, tomaría sentido si se focalizarán hacia el ‘bien común’, el cual es analizado a continuación.

El ‘bien común’ es definido por la Doctrina Social de la Iglesia como *“el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”* (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2004: 164). Este concepto nace de la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas, que como miembros de la sociedad tienen el deber de la construcción del bien común, en el que se busca el bien de los demás como si fuese el propio bien como responsabilidad. En él, ninguno de los miembros de la sociedad está exento de colaborar con sus capacidades y de sus derechos fundamentales. En este sentido, la participación de los bienes creados debe revocarse al ‘bien común’, para lo cual se requiere del compromiso por la paz, una correcta organización de los poderes del Estado, la salvaguardia del ambiente y la prestación de servicios esenciales. (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2004: 164-170).

La Unión Europea juega el rol fundamental en el ejercicio de las competencias, siendo el órgano director y regulador, mientras que el Estado ejerce un rol más pasivo como ejecutor. Por ejemplo: En lo que refiere a los Estados sobre las competencias exclusivas, en el numeral 1 del Artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se menciona: *“(…)mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión”* (Unión Europea, 2010:50); y en cuestión a los Estados sobre las competencias compartidas, en el numeral 2 del Artículo 2 del mismo Tratado se menciona: *“Los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya.”* (Unión Europea, 2010:50).

No obstante la disposición de competencia de la Unión Europea de apoyar, coordinar y complementar en determinadas materias, como se mencionó en el subtítulo anterior, el Estado continuaría jugando su rol ejecutor como lo demuestra el Artículo 6 del mismo Tratado en el que se menciona: “(...)sin por ello sustituir la competencia de éstos en dichos ámbitos.” (Unión Europea, 2010:50). Lo cual constituiría la base para el análisis de la disyuntiva de este capítulo sobre la legitimidad de la intervención de la Unión Europea en Grecia. Es así que para profundizar en este contexto clave para el conjunto de este trabajo, a continuación se presenta lo siguiente.

En relación a la intervención a Grecia por medio de los Programas de Ajuste, como se ha revisado en el capítulo anterior, en cierto sentido, esta podría alinearse con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pues, aunque, el numeral 3 del Artículo 2 del mencionado establece: “*Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas y de empleo,(...)*” (Unión Europea, 2010:50), dichas competencias de los Estados se encuentran sujetas a determinados parámetros: “*(...), según las modalidades establecidas en el presente Tratado, para cuya definición la Unión dispondrá de competencia.*” (Unión Europea, 2010:50). Es así que, en consonancia con ello, en el numeral 1 del Artículo 119 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se menciona (Unión Europea, 2010:96):

(...) la acción de los Estados miembros y de la Unión incluirá, en las condiciones previstas en los Tratados, la adopción de una política económica que se basará en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, en el mercado interior y en la definición de objetivos comunes, y que se llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia.

De hecho, todo esto podría enmarcarse en lo que Esteva (en Sachs 2010:22) definió como una única visión del ‘desarrollo’. Pues, además, en el numeral 3 del mismo Artículo se dice: “*Dichas acciones de los Estados miembros y de la Unión implican el respeto de los siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable*”. (Unión Europea, 2010:97)

En sí, los Programas de Ajuste con sus medidas de austeridad y rescate podrían interpretarse como la ‘coordinación’ de la política económica de los Estados miembros de la Unión Europea, pues, como se menciona en el Artículo 120 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: *“Los Estados miembros llevarán a cabo sus políticas económicas con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de la Unión, (...)”* (Unión Europea, 2010:97). En este sentido, se ha determinado que los Estados son responsables de las políticas económicas, para lo cual: *“(...) considerarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común y las coordinarán en el seno del Consejo, conforme a lo dispuesto en el artículo 120.”* (Unión Europea, 2010:97).

No obstante, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea habría tenido un limitante de base al fundamento jurídico para la aplicación de Programas de Ajuste de tal envergadura, puesto que las Instituciones de la Unión Europea se limitarían a recomendaciones, según el párrafo 2 del numeral 2 del Artículo 121 del Tratado de Funcionamiento: *“Sobre la base del informe del Consejo, el Consejo Europeo debatirá unas conclusiones sobre las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión.”* (Unión Europea, 2010:97), y orientaciones generales como se menciona en los párrafos 3 del numeral 2 del Artículo 121: *“Con arreglo a estas conclusiones, el Consejo, adoptará una recomendación en la que establecerá dichas orientaciones generales. El Consejo informará de su recomendación al Parlamento Europeo.”* (Unión Europea, 2010:97)

En conclusión, el Principio de Atribución contemplaría la intervención de la Unión Europea en Grecia, tanto en base a los tratados, como en la conexión de estos con los ejercicios institucionales.

3.1.3. Objetivos y tratados

Como punto clave para el entendimiento de las competencias de los Estados y del ente supranacional, los objetivos de esta institución se presentan como los demarcadores de sus acciones. Pues, en base a los objetivos de la Unión Europea, establecidos de forma global en el Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y los tratados, Tratado de la Unión Europea y Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea, que confieren competencias funcionales, en los tres tipos antes mencionados, se identifican extralimitaciones competenciales de la Unión Europea. Esta extralimitación de competencias nace como consecuencia de la circunscripción de una extensa gama de ámbitos en los tratados para alcanzar los objetivos comunitarios. En este sentido, cabe recalcar que la prevalencia del derecho comunitario y de dichos objetivos, rigen la relación Unión Europea – Estado, a pesar de que el Tratado de Lisboa haya señalado claramente las áreas de las competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias de apoyo (Bárcena, 2011:66-67).

Es por ello que, la intervención de la Unión Europea sería interpretada como una medida de re direccionamiento de las políticas Estatales de Grecia hacia los objetivos comunes de la entidad supranacional de la que es parte. En referencia a esto, en materia de mercado interior y objetivos macroeconómicos, por ejemplo, se establece la coordinación de políticas nacionales bajo principios rectores (Bárcena, 2011:63) en el numeral 3 del Artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: *“Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas y de empleo según las modalidades establecidas en el presente Tratado, para cuya definición la Unión dispondrá de competencia.”* (Unión Europea, 2010:50) y en el numeral 1 del Artículo 5 del mismo tratado: *“Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas en el seno de la Unión. Con este fin, el Consejo adoptará medidas, en particular las orientaciones generales de dichas políticas.”* En el cual además hace un referencia especial a los países de la Zona Euro, en la que se encuentran inmersos Grecia y Alemania: *“Se aplicarán disposiciones particulares a los Estados miembros cuya moneda es el euro.”* (Unión Europea, 2010:52).

Así, la legitimidad de la intervención de la Unión Europea a Grecia, en base a la distribución de competencias se limitaría si esta respondería únicamente a los tratados, pero alcanzaría su justificación en el nexo inherente de estos con las disposiciones institucionales. Pues, a criterio de Giuseppe Guarino, profesor emérito de la Sapienza, la confusión de reparto de poder, en especial en materia de políticas económicas, se debería a que las políticas y objetivos, establecidos en los tratados, se encontrarían conectados con las competencias en base a la disposición institucional y material. Lo cual implicaría

que los tratados no constituirían la única fuente de atribución de competencias, sino las disposiciones y actos adoptados en su marco por parte de las instituciones ordinarias de la Unión Europea (Bárcena, 2011:68-69).

De hecho, en cierto modo, se contempla que las instituciones de la Unión Europea tomen medidas de poder para alcanzar los objetivos de los tratados siguiendo un determinado protocolo establecido en la denominada ‘cláusula de flexibilidad’, descrita en el numeral 1 del Artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

Cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las disposiciones adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Cuando el Consejo adopte dichas disposiciones con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo (Unión Europea, 2010:192)

3.2. Principio de Subsidiaridad

En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.(...) (Unión Europea, 2010:18).

El Principio de Subsidiariedad, bajo la concepción de la Unión Europea, contemplaría en cierto grado la intervención de la Unión Europea como consecuencia del consentimiento del Estado Heleno con las reformas constitucionales anteriormente estudiadas, pues esta enmarcaría la supremacía de las instituciones supranacionales y los tratados frente a los Estados. Por eso, con el objetivo de determinar el ejercicio de las competencias de la Unión Europea y de los Estados en el marco del Principio de Subsidiariedad, se analizará, en base al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el primer punto el ejercicio de competencias de la Unión Europea como ente interventor, y en el segundo punto el ejercicio de competencias de los Estados y los Parlamentos Nacionales como meros actores para el funcionamiento de la Unión. En consonancia, en el

tercer punto se analizarán los derechos de información y oposición de los Parlamentos Nacionales para la profundización del concepto de subsidiariedad de la Unión Europea. Este subcapítulo es importante al determinar que el Principio de Subsidiariedad, como lo define la Unión Europea, favorece a las instituciones ‘superiores’ frente a las ‘menores’, es decir a la Unión Europea frente a los Estados.

3.2.1. Ejercicio de Competencias de la Unión Europea

En la aplicación de los Programas de Ajuste, en cierto sentido ha sido necesario el consentimiento de las autoridades del Gobierno griego, pues caso contrario habría existido una contravención al Principio de Subsidiariedad. De hecho el Parlamento Europeo (2014:2) define al Principio de Subsidiariedad como la garantía de un determinado grado de independencia de una autoridad inferior de una instancia superior y de un poder local de un poder central. Es decir, en el caso de la Unión Europea, la subsidiariedad implica un determinado grado de independencia de un Estado respecto de la Unión Europea. Menciona además que el Principio de Subsidiariedad hace referencia a la repartición de competencias entre los diferentes niveles de poder, el cual constituiría la base institucional de los Estados federados.

No obstante, esta definición de la subsidiariedad se vería limitada frente a la de la Doctrina Social de la Iglesia, para la cual la ‘subsidiaridad’ es la exigencia de tutelar y promover las expresiones originarias de la sociabilidad como la familia, las realidades territoriales locales, sociales, económicas y culturales que forman una red de relaciones como tejido social que constituye una comunidad de personas, puesto que cada persona, familia y cuerpo intermedio posee algo único que puede ofrecer al resto. Es por ello que bajo este principio, las sociedades de orden superior deben seguir el “subsidium” o actitud de ayuda a las de orden menor para que estas no sean destruidas o absorbidas, por lo que la libertad y la responsabilidad de las personas, familias, asociaciones y organizaciones intermedias no puede ser suplantada. En este sentido, el Estado puede ejercer su función de suplencia cuando existe grave desequilibrio e

injusticia social para crear mayor igualdad, justicia y paz (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2004: 185 - 188).

Por el contrario, cuando se establece el Principio de Subsidiaridad, según la Unión Europea, se legitima la intervención de la Unión cuando los Estados no pueden alcanzar suficientemente los objetivos de una acción, pues este constituye un principio regulador de las competencias de la Unión Europea, fundamentadas en el Principio de Atribución, descrito en el subcapítulo anterior. En este sentido, el Principio de Subsidiaridad regula todos aquellos ámbitos en los que la Unión Europea no tenga competencias exclusivas, es decir en las competencias compartidas y competencias de apoyo descritas en el subcapítulo anterior. (Parlamento Europeo, 2014). De hecho, la Doctrina Social de la Iglesia contempla la intervención de la entidad superior cuando existe grave desequilibrio e injusticia social para crear mayor igualdad, justicia y paz

Bajo la definición de ‘subsidiaridad’ de la Unión Europea, su intervención en Grecia sería legítima, pues, el Parlamento Europeo (2010, 2014:2), en base al numeral 3 del Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, establece tres condiciones para que las instituciones de la Unión Europea actúen en base al Principio de Subsidiaridad, Estas tres condiciones, en estrecha relación con lo analizado en el Capítulo II y subcapítulo anterior desde la visión de la entidad supranacional se cumplirían: a) El ámbito o materia debe encontrarse dentro de las competencias compartidas o de apoyo, pues de ser de competencia exclusiva de la Unión Europea tiene todo derecho de llevar cualquier acción, o de ser competencia exclusiva del Estado no podría intervenir b) El o los Estados no pueden alcanzar de manera suficiente los objetivos de la acción pretendida y c) Puede realizarse mejor la acción a escala de la Unión Europea , ya sea por su dimensión o sus efectos.

3.2.2. Ejercicio de competencias de Estados y Parlamentos Nacionales

Tras haber demarcado en el título anterior la distinta connotación de subsidiaridad desde los conceptos propuestos por este trabajo y el de la Unión Europea, cabe notar que, para esta, este principio protege la capacidad de

decisión y actuación de los Estados, mas no necesariamente tutela y promueve sus expresiones originarias²⁹ como nos lo propone el Pontificio Consejo “Justicia y Paz” (2004: 185 - 188). Ello constituye un factor clave en la comprensión de la forma en que se ejecutaron las medidas de austeridad y rescate. Aunque en la introducción del Protocolo sobre la Aplicación de los Principios de Subsidiaridad y Proporcionalidad de la Unión Europea (2010:206) se menciona que este aproxima lo mayormente posible al ciudadano al ejercicio de las competencias : “*DESEANDO hacer lo necesario para que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos de la Unión;*” y asegura la adopción de acciones a nivel local, esto no implicaría que una acción siempre deba ser adoptada al nivel más próximo a los ciudadanos (Europa, 2010).

En esta línea, el Principio de Subsidiariedad, implicaría la participación de los parlamentos nacionales en las políticas de la Unión Europea, pues, la construcción de esta entidad supranacional ha implicado que las instituciones de la Unión Europea asuman competencias reservadas anteriormente a la soberanía nacional, como la justicia y los asuntos de interior. En esta construcción, por ende, el Tratado de Lisboa estableció la integración de los parlamentos nacionales, por lo que el Tratado de la Unión Europea contempla en su Artículo 12 la contribución activa de los parlamentos nacionales al buen funcionamiento de la Unión Europea. En este marco, y en el del Protocolo sobre el Cometido de los Parlamentos Nacionales en la Unión Europea, se contemplan dos derechos de los parlamentos: el derecho a la información y el derecho de oposición (Europa, 2010). Además, el Protocolo sobre la Aplicación de los Principios de Subsidiaridad y Proporcionalidad abarca también cuestiones relacionadas a los mismos.

3.2.3. Derechos de los Parlamentos nacionales

La concepción de subsidiariedad de la Unión Europea determina los derechos de los Parlamentos Nacionales. Los cuales, como se mencionó en títulos anteriores, serían muy limitados para la promoción de las expresiones

²⁹ Es este caso, expresiones originarias, se puede entender como todo aquello propio de la cultura de una sociedad.

originarias de los pueblos a los que representan y que constituyen importantes en la protección de las sociedades intermedias para el Pontificio Consejo “Justicia y Paz” (2004: 185 - 188). Por ejemplo, en referencia al derecho de información, en el Artículo 1 del Protocolo sobre el Cometido de los Parlamentos Nacionales en la Unión Europea se contempla únicamente que la Comisión transmitirá el programa legislativo anual, los documentos de consulta de la Comisión cuando estos se publiquen e instrumentos de programación legislativa o de estrategia política. Los documentos de consulta de la Comisión que serán proporcionados son los libros verdes, libros blancos y comunicaciones. Además en el Artículo 2 del mismo protocolo se define a los proyectos de actos legislativos como:

(...) las propuestas de la Comisión, las iniciativas de un grupo de Estados miembros, las iniciativas del Parlamento Europeo, las peticiones del Tribunal de Justicia, las recomendaciones del Banco Central Europeo y las peticiones del Banco Europeo de Inversiones, destinadas a la adopción de un acto legislativo. (Unión Europea, 2010:203)

En esta línea cabe mencionar que el derecho de información, aunque casi irrelevante para la situación de Grecia, ha sido claramente profundizado en los procesos organizativos de la Unión Europea. Por ejemplo, el Artículo 2 del Protocolo sobre el Cometido de los Parlamentos Nacionales en la Unión Europea establece la entidad responsable de la transmisión de información a los Parlamentos nacionales, como se describe a continuación. Así se menciona que los proyectos de actos legislativos que se dirijan al Consejo o Parlamento Europeo serán transmitidos a los Parlamentos nacionales. Por una parte, los proyectos de actos legislativos, cuyo origen sea el Parlamento o la Comisión, serán transmitidos directamente a los parlamentos nacionales por parte de estas mismas instituciones, mientras que por otra parte, aquellos que tengan su origen en el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones o un grupo de Estados serán transmitidos por el Consejo (Unión Europea, 2010:203). El Artículo 4 del Protocolo sobre la Aplicación de los Principios de Subsidiaridad y Proporcionalidad, además de replicar lo antes mencionado, expresa: “*El Parlamento Europeo transmitirá sus resoluciones legislativas y el Consejo sus posiciones a los Parlamentos nacionales inmediatamente después de su adopción.*” (Unión Europea, 2010:207).

Frente al caso griego, el derecho de oposición, cabe mencionar, no habría constituido una fuente de derecho para evitar la injerencia directa de la Unión Europea en el orden del país, pues este se direcciona únicamente hacia actos legislativos que se toman en el seno de la Unión Europea. Esto se haría evidente en el Protocolo sobre el Cometido de los Parlamentos Nacionales en la Unión Europea (2010: 203) que menciona en su introducción:

DESEANDO impulsar una mayor participación de los Parlamentos nacionales en las actividades de la Unión Europea e incrementar su capacidad para manifestar su opinión sobre los proyectos de actos legislativos de la Unión Europea y otros asuntos que consideren de especial interés,

No obstante, para analizar la aplicación de la conceptualización del Principio de Atribución, se considerará de manera más profunda el derecho de oposición. En primer plano, este derecho se ajusta a la visión dada por el Tratado de Lisboa sobre los Parlamentos, en la que estos únicamente juegan un rol ‘activo’ en el funcionamiento de la Unión Europea, mas ya no en la construcción de la misma (Europa, 2010). En consonancia, por ejemplo, el párrafo 1 del Artículo 3 del Protocolo antes mencionado establece únicamente el derecho de los Parlamentos nacionales de dirigir un dictamen que especifique las razones por las que un proyecto de acto legislativo no se encuentra acorde con el Principio de Subsidiaridad a los Presidentes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. Al respecto, el Protocolo sobre la Aplicación de los Principios de Subsidiaridad y Proporcionalidad en su Artículo 6 especifica las condiciones del ejercicio de este derecho (Unión Europea, 2010: 207).

Inclusive bajo este derecho enmarcado en el Principio de Subsidiariedad, el Parlamento Nacional se debe regir al veredicto de las instituciones supranacionales y demás parlamentos. En el numeral 2 del Artículo 7 del Protocolo sobre la Aplicación de los Principios de Subsidiaridad y Proporcionalidad se establece que un proyecto de acto legislativo deberá volver a ser estudiado si al menos un tercio del total de votos atribuidos a los Parlamentos nacionales dictaminan que este no respeta el Principio de Subsidiariedad, pero cuando el proyecto de acto legislativo sea concerniente al espacio de libertad, seguridad y justicia será necesario un cuarto del total de

votos atribuidos a los Parlamentos. Además, la Comisión o la institución de dónde se origina el proyecto de acto legislativo (Banco Central Europea, Banco Europea de Inversiones, Parlamento Europea o Tribunal de Justicia) puede decidir retirarlo, modificarlo o mantenerlo explicando los motivos. (Unión Europea, 2010: 208)

E inclusive, si al menos la mayoría simple del total de votos atribuidos a los Parlamentos nacionales dictamina que el proyecto de acto legislativo no respeta el Principio de Subsidiariedad, como se menciona en el numeral 3 del mismo Artículo, las instituciones supranacionales tendrían la última palabra. Pues, tras el estudio pertinente, será la Comisión quien decida retirarlo, modificarlo o mantenerlo explicando los motivos. Es así que, en el caso de mantener el proyecto, es deber de la Comisión justificar, por medio de dictamen motivado, por qué este sí respeta el Principio de Subsidiariedad. En consecuencia, junto a los dictámenes motivados de los Parlamentos nacionales, el mencionado dictamen motivado debe ser entregado al legislador de la Unión (Unión Europea, 2010: 208).

Esta dependencia de un Estado objetante de las entidades supranacionales se evidencia aún más en esta fase, pues con respecto al rol del legislador de la Unión, el cual se encuentra conformado por el Consejo y el Parlamento Europeo, en el literal a) se establece que este, en base a los documentos entregados por la Comisión y los Parlamentos nacionales, debe estudiar la compatibilidad de la propuesta de proyecto legislativo con el Principio de Subsidiaridad; y en el literal b) se determina que la propuesta legislativa se desestimarán cuando este considere que no existe compatibilidad con el Principio de Subsidiariedad. Esta incompatibilidad será determinada en base a la mayoría de votos emitidos en el Parlamento Europeo o por mayoría del 55% de los miembros del Consejo (Unión Europea, 2010: 208).

La última vía, en la que un Estado puede hacer ejercicio del Principio de Subsidiariedad, según la visión de la Unión Europea, es ante el Tribunal de Justicia. Ya que, un Estado, o este en nombre de su Parlamento Nacional o una de sus Cámaras, podrá interponer un recurso por violación del Principio de

Subsidiariedad, según se contempla en el Artículo 8 del Protocolo sobre la Aplicación de los Principios de Subsidiaridad y Proporcionalidad. En base en este Artículo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene competencia para pronunciarse al respecto. Además esto se interpondrá a los procedimientos del Artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Unión Europea, 2010: 208), el cual en su párrafo 2 menciona:

A tal fin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión. (Unión Europea, 2010: 162)

3.3. Principio de Proporcionalidad

“En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados (...)” (Unión Europea, 2010:18).

El Principio de Proporcionalidad contemplaría la intervención de la Unión Europea en Grecia frente a la ‘crisis’ financiera. No obstante, por este mismo principio dicha intervención debería ser limitada. Para comprender este principio, que juega un rol importante en la determinación y ejercicio de competencias, en primera línea se establecerá el origen de su reconocimiento y definición como control de la intervención de un ente ‘superior’ a uno ‘inferior’. En segunda línea se indagará la transmisión de este principio a la Unión Europea, en la que se determinará su relación con su origen. En tercera línea se analizarán las disyuntivas que ha provocado la interpretación generalizada actual de dicho principio sin remitirse a su sentido originario. Por esta razón, el presente subcapítulo constituye trascendental no únicamente para la comprensión los principios que rigen la determinación y ejercicios de competencias dentro de la Unión Europea, sino para comprender que este, aunque direccionado a limitar las intervenciones de la Unión Europea a los Estados, en su conjunto con el Principio de Subsidiariedad, parcialmente legitimaría la acción de la Unión Europea.

3.3.1. Definición del Principio de Proporcionalidad

El ejercicio de las competencias se encuentra determinado por el Principio de Proporcionalidad, por lo que la intervención de la Unión Europea a Grecia se encontraría limitada por este. Para la comprensión de este es necesario determinar su origen y definición. Por un lado, su origen sería el derecho prusiano, en el que el Tribunal Superior Administrativo de Prusia lo definió como: *“prohibición de exceso”, “criterio de control sobre los poderes discrecionales de la administración y como límite al ejercicio del poder de la policía”* (Kraft, 2007: 170-171). Por otro lado, Bernal (2007:44) considera que *“el surgimiento del principio de proporcionalidad, como concepto propio del Derecho Público europeo, se remonta al contractualismo iusnaturalista de los tiempos de la ilustración”*. En fin, el concepto del Principio de Proporcionalidad se debe al Tribunal Constitucional de Alemania a partir de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, cuando se lo asoció a la naturaleza de los derechos fundamentales y al Estado de Derecho. Es así que dicho Tribunal Constitucional lo define como: *“(…) un principio general de rango constitucional, inserto en la cláusula del estado de derecho que preside la actuación de todos los poderes públicos”* (Fernández, 2008:283)

Puesto que el Principio de Proporcionalidad tiene como objetivo el resguardo de los derechos y libertades, este se encontraría relacionado a la libertad, la cual es definida por Sen (2000:29-31), como expansión de las capacidades de los individuos para el tipo de vida que se desea llevar y que la ubica como medio y fin del ‘desarrollo’. En contraste, la Doctrina Social de la Iglesia condena el reduccionismo de cualquier definición individualista de la libertad reducido a la autarquía del yo carente de relaciones y la define como *“...la capacidad de disponer de sí mismo con vistas al auténtico bien, en el horizonte del bien común universal”* (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2004: 199 – 200)

En esta base, se podría comprender que el Principio de Proporcionalidad se encuentra direccionado hacia la prohibición de actuaciones o intervenciones excesivas de los poderes públicos y la protección de los derechos fundamentales. De hecho, dentro de la concepción de la Constitución alemana, la intervención del poder público debe ser reducida a lo mínimamente indispensable, pues el ser

humano es considerado un ser libre de personalidad autónoma, miembro de una comunidad y limitado por los derechos de los otros. Es así que, en definitiva, el Principio de Proporcionalidad se fundamenta en que la libertad del individuo es un principio, mientras que la restricción de la misma es una excepción. Por lo tanto, la intervención pública debe ser excepcional y cuidadosa en su intensidad e impacto al individuo. Por lo que es necesaria una ponderación entre interés público e interés individual (Arnold, Martínez y Zúñiga, 2012:68-69).

Por ende, la intervención de un ente ‘superior’ frente a un ente ‘menor’ estaría únicamente justificada en favor del ‘bien común’, para lo cual el Tribunal Constitucional de Alemania estableció la denominada *Stufentheorie* o Teoría de Fases como fundamentos del Principio de Proporcionalidad como herramienta de regulación de la intervención del Estado en los derechos y libertades de las personas. En la primera fase se condiciona la intervención a una persecución de una finalidad legítima de interés público. En la segunda fase se establecen requisitos subjetivos para tener acceso a una determinada situación o bien en base al interés público. En la tercera fase se establecen objetivos dependientes de la situación objetiva en la que se desenvuelve en base al interés público. No obstante, el Tribunal Constitucional de Alemania determinó que, para el cumplimiento eficaz de la finalidad que se persigue, la intensidad de la intervención del poder público debe ser la mínima y no excederse (Arnold et al, 2012:69-70).

Por consiguiente, la intervención ejercida en un ente ‘menor’ se encontraría restringida por distintos parámetros. Es así que, bajo el Principio de Proporcionalidad, la intervención del orden público en la libertad y propiedad debe cumplir los 4 requisitos siguientes: a) Esta debe perseguir una finalidad legítima b) Debe ser propicia para la promoción de dicho objetivo legítimo, sin que esto signifique su realización c) La intervención debe ser necesaria, por lo que debe aplicarse la mínima intervención. De hecho, si existiesen varias alternativas e intervenciones, la favorecida debe ser aquella que afecte menormente a los derechos involucrados y d) Debe ser proporcional al objetivo de la intervención, su urgencia o necesidad. Aunque la situación particular juega

un rol importante, esta no puede anular o negar el derecho (Arnold et al, 2012:71).

3.3.2. Transferencia del Principio de Proporcionalidad a la Unión Europea

El Principio de Proporcionalidad ha alcanzado su culmen con su adaptación para la regulación de la relación Unión Europea – Estados, pues en Alemania ha sido considerado como el concepto más importante de la dogmática del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, ya que ha permitido moderar la tensión entre el individuo y el poder público. De hecho, el Tribunal Constitucional de Alemania, con el fin de proteger las competencias de las administraciones locales ha trasferido este principio a las relaciones entre el gobierno central y las administraciones locales. (Arnold et al, 2012:69,71). Posteriormente, el Principio de Proporcionalidad ha sido transferido a las cuestiones jurídicas de la Unión Europea hasta convertirse en un elemento normativo, presente tanto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como en el Tratado de la Unión Europea.

En sí, el Principio de Proporcionalidad se enmarca como principio fundamental para la construcción del Estado de Derecho. Pues, aunque el proceso de la creación de la Unión Europea, a partir de mediados del siglo XX, ha implicado que los Estados miembros transfieran competencias a las instituciones comunitarias, a inicios de la construcción de la comunidad política no existía reconocimiento expreso de derechos fundamentales y elementos de Estado de Derecho. Y por esta razón, se estableció un proceso de constitucionalización de la integración europea. En este sentido, el hoy Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en base a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros y la Convención Europea de Derechos Humanos, ha reconocido y desarrollado los derechos fundamentales, principios generales y principios propios de un Estado de Derecho (Arnold et al, 2012:69,73-74).

Por ende, el Principio de Proporcionalidad constituye fundamental para el ejercicio de competencia y ante todo para el resguardo de los Estados. Para la moderación de las restricciones que impusiesen los Estados a las libertades

fundamentales del derecho comunitario como: libre circulación de personas, libre circulación de bienes, libre circulación de capitales y libre circulación de servicios, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea adoptó el Principio de Proporcionalidad. En esta adopción, se ha establecido que el Principio de Proporcionalidad se direcciona a proteger los derechos fundamentales y a regular las restricciones a estos derechos fundamentales, pues estas podrían darse únicamente si son indispensables para cumplir una finalidad legítima. Además, con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en diciembre de 2000 en Niza, enmendada y proclamada nuevamente en 2007 y elevada al mismo carácter jurídico vinculante de los Tratados en 2009 con el Tratado de Lisboa (Europa, 2010), el Principio de Proporcionalidad adquirió un carácter normativo. (Arnold et al, 2012:69,74).

En fin, la intervención de la Unión Europea en Grecia sería parcialmente justificable bajo el Principio de Proporcionalidad, pues, aunque se ha justificado esta acción bajo la bandera del ‘bien público’, esta habría debido ser lo más limitada posible, lo cual puede ser mayormente esclarecido en el siguiente título. Es así que en el mencionado carácter normativo se establece en el numeral 1 del Artículo 52 la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sobre Alcance e interpretación de derechos y principios, lo siguiente:

Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. (Unión Europea, 2010: 52)

3.3.3 Disyuntivas en el Principio de Proporcionalidad

Aunque ha existido la denominada mutación constitucional de gran envergadura en el proceso de integración de la Unión Europea (Bárcena, 2011:132-133), la intervención de la Unión Europea ha generado debate en torno a los principios aquí presentados y la soberanía, que no será analizada en este trabajo. Frente a este panorama, la proporcionalidad, según Robert Alexy (2007), constituiría un mecanismo para resolver los conflictos o colisiones de los

derechos. En este sentido, según el mismo autor, cabe notar que las normas de los derechos fundamentales se clasificarían en reglas, concebidas como normas que pueden cumplirse o no, y principios, concebidos como normas que ordenan que una cuestión sea realizada en lo mayormente posible en el marco de las posibilidades reales existentes; por lo que el alcance del derecho contenido no es posible entenderlo. En esta línea, cuando existe un conflicto entre reglas, la solución radicaría en la introducción de una cláusula de excepción que bien elimine el conflicto o invalide una de las reglas. Mientras que cuando existe un conflicto de principios, uno de estos debe ceder ante el otro, lo cual llevaría a la ponderación de derechos, y a contrapesar los bienes jurídicos.

Sin embargo, esta visión acarrearía cuatro problemas: a) La colisión de normas implicaría una colisión de derechos, igualando estos dos términos. Lo cual contradice el rol de las normas de reconocer y proteger los derechos, mas no de crearlos b) Se concebiría que los derechos fundamentales no tienen límites, cuando estos, según Härbele (2003:52), tendrían contenido y límite, y estarían delimitados en la jerarquización. En esta línea, según Aldunate (2008: 279), el conflicto residiría en el ejercicio de la libertad de dos entes, que puede resolverse entre los límites del uno y del otro c) Un derecho sería mermado en favor de otro, lo que incluiría la derogación del otro. Además, según Isler (2011:43), *“una acción que por sí misma transgrede algo básicamente valioso no puede ser buena”* d) Los parámetros de peso de los derechos podrían encubrir preferencias valóricas o ideológicas (Bertelsen, 2010:50)

Es por ello que, si se remonta a los orígenes del Principio de Proporcionalidad, la intervención de la Unión Europea a Grecia, aunque sería legítima en términos globales para el cumplimiento de los objetivos del Tratado, podría ser debatida en base a no ser necesariamente la acción mínima posible, pues este se constituye como mecanismo de control del poder, no únicamente el objetivo de determinar si es lícita o no la intervención del ente superior, sino de regularla. Es decir, el Principio de Proporcionalidad controla el ejercicio de las potestades públicas a la hora de regular el ejercicio de los derechos. Es por ello que, según Aldunate (2008:264):

(...) el principio de proporcionalidad se deriva de estar los poderes públicos vinculados a los derechos fundamentales y, en consecuencia, no ser admisible para ellos una disminución de las posibilidades de actuación de los titulares de derechos fundamentales si no es en virtud de una causa justificada, y solamente en la medida necesaria para obtener el fin que justifica dicha causa.

Tras haber determinado la delimitación y el ejercicio de competencias de la Unión Europea según los principios regentes de Atribución, Subsidiaridad y Proporcionalidad contemplados en el Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea constituye trascendental remarcar los siguientes puntos que entrelazan la información presentada. Si se toma como base la concepción del ‘bien común’ de la Doctrina Social de la Iglesia como *“el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”* (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2004: 164), este constituiría la base en torno a la cual deberían girar los tres principios antes mencionados, pues en él se encuentra la esencia de la conformación de una Unión Europea, o cualquier otra forma asociativa. Además, para el enriquecimiento del ‘bien común’, se hace necesaria la ‘subsidiaridad’, definida por la Doctrina Social de la Iglesia como la exigencia de tutelar y promover las expresiones originarias de cada Estado, pues cada cual posee algo único que puede ofrecer a la comunidad. Sin embargo, la idea de que las ‘comunidades menores’ no sean destruidas o absorbidas, contrasta severamente con los Programas de Ajuste (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2004: 185 - 188).

El Principio de Atribución, que determina las competencias de los Estados y de la Unión Europea (Unión Europea, 2010:18) presenta una prevalencia del derecho comunitario y de sus objetivos en el regimiento de la relación Unión Europea – Estado, (Bárcena, 2011:66-67). Este hecho, se hace más evidente al determinar al Principio de Atribución únicamente como regulador de las competencias (Parlamento Europea, 2014) y no como la exigencia de favorecer las sociedades intermedias (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2004: 185-188). Pues para los Estados y Parlamentos Nacionales únicamente se determina el derecho a la comunicación y el derecho a la oposición (Unión Europea, 2010: 203) frente a las medidas de la entidad supranacional.

En consonancia, sin embargo, el Principio de Proporcionalidad aparecería como el regulador de los excesos que la entidad supranacional pudiera ejercer contra la entidad menor (Unión Europea, 2010:18) en base a los derechos fundamentales conforme a su origen en el derecho prusiano (Arnold et al, 2012:67). Situación, que se agudiza y entra en conflicto desde la visión Robert Alexy (2007), en la que constituiría un mecanismo para resolver los conflictos o colisiones de los derechos. No obstante, en relación al Principio de Atribución y de Subsidiariedad fundamentados básicamente en objetivos, la intervención de la Unión Europea sería legítima desde su construcción conceptual.

VI. ANÁLISIS

Con el objetivo de analizar la disparidad socioeconómica entre Grecia y Alemania como base para la aplicación de medidas de austeridad y rescate a Grecia bajo el Artículo 5 del tratado de la Unión Europea desde las teorías post desarrollista, post modernista, del ‘don’ y del sistema mundo, apoyadas, además, en un marco conceptual de la Doctrina Social de la Iglesia, se presentará, por un lado, la premisa que reconoce la realidad antes mencionada en base a los tres capítulos presentados en este trabajo, y por otro lado, el análisis de esta premisa a la luz del marco conceptual propuesto para finalmente cerrar este análisis con la determinación de la concepción formal y ‘sustantivista’ de la economía en este caso.

La disparidad socioeconómica entre la República Helena y la República Federal de Alemania, al encontrarse fundamentada en los supuestos del Sistema Económico de Mercado que relacionan el ‘crecimiento económico’ con un ‘buen’ ‘estándar de vida’ y un ‘mayor’ nivel de ‘desarrollo’, presenta a la situación alemana como modelo positivo de ‘desarrollo’ frente a la ‘decadente’ gestión griega, con un especial énfasis en la ‘productividad’. Por esta razón, se podría mencionar que, dicha desigualdad constituiría un punto de partida para la construcción de las medidas de austeridad y rescate contempladas en los dos Programas de Ajuste Económico para Grecia en 2010 y 2012, los cuales, en cierto grado se encontrarían legitimados por la concepción, establecida por y para la Unión Europea, de los Principios de Atribución, Subsidiariedad y Proporcionalidad del Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Sin embargo, ¿encierra esta premisa toda la complejidad de esta temática?

Para responder a esta pregunta es imprescindible analizar la construcción conceptual sobre la que se fundamenta esta deducción. En primer lugar, tomar al Sistema Económico Social de Mercado, nacido frente a una realidad histórica concreta de Alemania, como referente para todos los países de la Unión Europea constituiría la destrucción de los diferentes estilos de vida europeos en favor de la uniformidad. El fundamentar el Sistema Económico Social de Mercado en conceptos como el ‘desarrollo y el ‘estándar de vida’, entendidos únicamente

como un factor numérico como es el caso del PIB y de la productividad, no contemplaría otras dimensiones de la economía fuera del mercado, en cuya liberalización se centran los Programas de Ajuste económico. De hecho, las distintas formas de protesta del pueblo griego, ya sean mediante acampadas o medidas de resistencia como las del movimiento ‘no pagamos’ podrían ser consideradas como una respuesta a la ‘evaporización’ del Estado, a cargo de la educación, de la salud y del sistema de pensiones, por medio de las medidas de austeridad y rescate impuestas por el ente supranacional. Dichas protestas podrían interpretarse como un reclamo del pueblo griego frente al rol tradicional del Estado, no solo como proveedor de servicios sociales, cuyo gasto porcentual es similar al alemán, sino como proveedor de servicios públicos.

En segundo lugar, la construcción conceptual de los Principios de Atribución, Subsidiariedad y Proporcionalidad por parte de la Unión Europea constituirían una prolongación del proceso de uniformidad antes descrito. Pues, como se ha analizado más ampliamente en el tercer capítulo, estos se han planteado para favorecer la ‘mutación constitucional de gran envergadura’ como es definido el proceso de unificación de la Unión Europea, mas no para tutelar y promover las expresiones originarias de cada Estado para la construcción del bien común. Es ahí, entonces, donde se encuentra la legitimidad de los Programas de Ajuste Económico para Grecia, ya que los objetivos, tratados e instituciones de la Unión Europea, direccionados en favorecer a la ‘entidad supranacional’ frente a los Estados, constituyen la fuente jurídica para las mencionadas acciones.

En tercer lugar, los Programas de Ajuste Económico, aunque se muestran como una acción ‘solidaria’ o un ‘don’ con el Estado heleno, contravendrían a la solidaridad y al Estado en sí mismo. Pues, la aplicación de reformas a las finanzas públicas y a la política económica del país heleno, concebidas como un ‘contra don’, por la entrega de los dividendos de los préstamos otorgados a Grecia, no han sido interpretadas por el pueblo como un servicio sino como una opresión, un ‘don venenos’ o una ‘ayuda’ interesada. En este contexto se destruye la lógica de solidaridad, ya que ha sido interpretada como un proceso de ‘evaporización’ del Estado – nación frente a la ‘solidificación’ del sistema

económico y financiero por medio de su desregularización, liberalización y flexibilización como es el caso de la privatización de las empresas estatales y la liberalización del mercado laboral. Y de ahí se podría comprender la incertidumbre respecto al futuro del pueblo griego, manifestado en su ‘despertar político’, por medio de diferentes acciones de protesta que se relacionan con el ‘anti europeísmo’, descrito en el capítulo II.

Finalmente, tras analizar el contenido de los tres capítulos, es imprescindible mencionar que, como se describe en la premisa, la legitimización de los Programas de Ajuste es factible únicamente desde la concepción formal de la economía, pues desde la concepción ‘sustantivista’, en la que otros factores, además del intercambio o mercado, como la reciprocidad, la redistribución y la hacienda también juegan un rol importante, esta no es posible. Ya que, como se evidenció en el segundo capítulo, el Estado griego juega un rol importante en el proceso redistributivo de la riqueza por medio de las empresas estatales presentes en sectores como el transporte, la educación y la salud, por ejemplo.

VII. CONCLUSIONES

- La disparidad socioeconómica entre Alemania y Grecia en 2008 sí justificaría las medidas de austeridad y rescate impuestas a la República de Grecia por parte de la Unión Europea, que sí estarían acordes a los principios que rigen la delimitación y ejercicio de competencias de la UE del Artículo 5 del Tratado de la UE, en el marco de la economía formal en el que se encuentra el Sistema Económico Social de mercado que rige a ambos Estados y en el marco de los Principios de Atribución, Subsidiariedad y Proporcionalidad que rigen la relación de los Estados con la Unión Europea. Por lo que la hipótesis de este trabajo es verdadera en el marco antes mencionado.
- Desde la conceptualización de ‘desarrollo’ y ‘estándar de vida’, la República Federal de Alemania se muestra ‘superior’ a Grecia en la disparidad numérica existente entre ambos países, ya que, según las estadísticas de Eurostat, en lo referente a economía y sociedad como en el PIB per cápita existe 23% de diferencia entre ambos países, en la productividad 43% de diferencia.; y el endeudamiento en Alemania representa el 66,8% del PIB y en Grecia el 112,9% del PIB. No obstante, en base a estos mismos parámetros, se puede identificar la contraposición de objetivos nacionales. Por ejemplo, a pesar de que Alemania tiene 7,5% de desempleo que Grecia 7,8%, valores muy similares, de la conformación de la población empleada en Grecia, existe una valorización del empleo a tiempo completo con contrato a largo plazo a diferencia de Alemania, pues la tasa de empleo parcial germana fue de 25,9 %, mientras que la helénica de 5,6 % y la tasa de empleo con un contrato de duración limitada del total de empleados en el país, Alemania tenía un 14,7 % mientras que Grecia un 11,5%.
- La concepción de ‘subsidiariedad’ de la Unión Europea se ha deslindado de la visión de la Doctrina Social de la Iglesia en favor de las sociedades intermedias, en este caso el Estado, a pesar de que el Sistema Económico Social de Mercado, regente para toda la Unión Europea, afirma tener su origen en ciertos valores cristianos; mientras que la concepción de proporcionalidad, de igual forma, ha mutado desde su origen en el derecho prusiano para evitar en lo posible la

intervención de un ‘ente mayor’, en este caso la Unión Europea’ a un ‘ente menor’, en este caso Grecia.

- El Principio de Atribución de competencias ha sido el fundamento para el proceso de ‘mutación constitucional a gran envergadura’ de la Unión Europea en la que se ha incluido casi todos los ámbitos socioeconómicos para que la ‘entidad supranacional’ ejerza un determinado grado de influencia, mientras que los Principios de Subsidiariedad y Proporcionalidad, rectores del ejercicio de competencias, se han direccionado para favorecer este proceso determinando la primacía de la Unión Europea sobre los Estados en las diferentes temáticas.
- La aplicación de los Programas de Ajuste a Grecia ha dado cuenta del estado de vulnerabilidad del Estado heleno frente a la legislación e institucionalidad de la Unión Europea, en base a los principios antes mencionados, y las múltiples y diversas manifestaciones contrarias del pueblo a dichas medidas han demostrado el proceso de ‘evaporización’ al que ha sido sometido el Estado griego, gestor de la distribución de la riqueza, por medio de las medidas de liberalización y flexibilización que han ‘solidificado’ aún más un sistema económico que, no necesariamente, como se ha mencionado antes, se ajustaría a sus objetivos nacionales. Es así que surgen movimientos populares con una marcada tendencia ‘anti europeísta’ que se ha trasladado a los partidos de oposición, quienes buscan su consolidación en el poder.
- La visión de la economía formal es limitada al centrar su atención únicamente en el mercado y no contemplar la reciprocidad, la redistribución y la hacienda que sí se encuentran en la visión de la ‘economía sustantivista’. De ahí que la intervención de la Unión Europea en Grecia por medio de los Programas de Ajuste, legítima desde la primera visión, desde el marco conceptual planteado, no se justifique. Y es que, las distintas manifestaciones populares contrarias a estas reformas y los mismos datos numéricos sostienen este planteamiento como se ha argumentado antes.
- La ejecución de los Programas de Ajuste 2010 y 2012 por medio de las denominadas medidas de austeridad y rescate se han direccionado hacia la

‘licuefacción’ del Estado Heleno que había ejercido como el ‘sólido’ de la distribución de la riqueza por medio de las instituciones estatales de interés público como educación, salud, transporte entre otros, lo cual se enmarcaría en la construcción del ‘bien común’. Pero dicha ‘licuefacción’ ha sido acompañada de la ‘solidificación’ del Sistema Económico de Mercado, cuyos supuestos fundamentados en el crecimiento económico y la productividad han pasado a ser los regentes de la sociedad, que debe acoplarse a un sistema educativo y de salud en el que se prioriza la reducción de costos en maestros y medicinas, por ejemplo.

- La Doctrina Social de la Iglesia ha presentado principios como la ‘subsidiariedad’, la ‘solidaridad’, el ‘bien común’ y la ‘libertad’ con el fin de establecer la ‘justicia social’, los cuales han sido adoptados por grupos sociales y políticos, como Konrad Adenauer que los ha acoplado a las estructuras estatales y supraestatales como a las de los orígenes de la Unión Europea. No obstante, como se ha visto a lo largo del trabajo, la interpretación de dichos conceptos difiere en un alto grado de aquella que originalmente ha propuesto y profundizado la Doctrina Social de la Iglesia a lo largo del tiempo.

VIII. RECOMENDACIONES

- Aunque las medidas de austeridad y rescate impuestas a la República de Grecia por medio de los Programas de Ajuste Económico, centradas en la privatización de las empresas estatales y de servicios públicos y la liberalización del mercado laboral, se encontrarían justificadas en el marco de la economía de mercado y el marco de los principios del Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, convendría analizar, dentro de estos mismos espacios, la posibilidad de aplicar medidas alternativas, que impliquen menor resquebrajamiento social, direccionadas hacia los mismos fines económicos y financieros.
- A pesar de haber planteado la visión unidimensional numérica que implica el Sistema Económico Social de Mercado, por medio de índices como el PIB y la productividad, al no contemplar otros elementos como la reciprocidad, la redistribución y la hacienda, además del intercambio, y su configuración en una sociedad; en el planteamiento de la disparidad socioeconómica entre Grecia y Alemania en los índices antes mencionados y otros como la composición de la tasa de empleo, es necesario profundizar justamente la cosmovisión de las sociedades respecto a los diferentes parámetros analizados, como - por ejemplo - la contraposición entre las variables de productividad y tiempo de trabajo en ambos países.
- Tras el análisis de los Principios de Atribución, Proporcionalidad y Subsidiariedad como base para favorecer a la entidad supranacional frente a la estatal en el proceso de ‘mutación constitucional’ de la Unión Europea, sería oportuno contrastar la concepción y manera de aplicación de estos mismos principios en la República Federal de Alemania, en donde se habría originado desde su realidad federativa en la que rige el Sistema Económico Social de Mercado.
- Como se ha evidenciado a lo largo de este trabajo, la ‘evaporización’ del Estado ha dado paso a la ‘solidificación’ del Sistema Económico de Mercado fundamentado en supuestos que no necesariamente se ajustan a la realidad

sociocultural de las poblaciones. Por esta razón, sería de gran aporte investigar sobre los entes económicos favorecidos con la aplicación de las medidas de austeridad de los Programas de Ajuste como la liberalización del sistema educativo, farmacéutico, médico y de seguridad social, por ejemplo.

- Si bien se ha determinado que, desde una visión de la ‘economía sustantivista’, la intervención de la Unión Europea en Grecia sería injustificada, pues esta se centra únicamente en el mercado, convendría hacer un análisis de la economía griega y alemana desde una visión que integre los demás elementos en un contexto sociocultural de ambos países, los cuales han sido ignorados por la entidad supranacional en los informes previos como evaluativos a la aplicación de los Programas de Ajuste Económico.
- Se ha logrado determinar, en cierto grado, como los Programas de Ajuste Económico se han direccionado hacia la ‘licuefacción’ del Estado distribuidor de la riqueza para dar paso a la ‘solidificación’ del Sistema Económico de Mercado, lo cual ha generado resistencia por parte de la sociedad helena por medio de diferentes tipos de protesta. Sin embargo, constituiría de gran aporte, como continuidad de este trabajo, el análisis de los cambios estructurales que se han dado en la sociedad griega como el rol de la familia y otras comunidades intermedias en el proceso de distribución de la riqueza.
- A pesar de haber determinado en cierto grado la contraposición de concepciones de diferentes principios entre la Unión Europea y la Doctrina Social de la Iglesia, convendría indagar si estos conceptos de la Economía Social de Mercado nacida en Alemania y posteriormente transmitida a toda la entidad supranacional deberían aún ser categorizados de ‘inspiración cristiana’, y si la Doctrina Social de la Iglesia podría suscitar una reforma socioeconómica por medio de sus entidades sociales,, educativas y políticas.

BIBLIOGRAFÍA

- Aldunate, E. (2008). *Derechos fundamentales*. Santiago: Legal Publishing.
- Alexy, R. (2007). *Teoría de los derechos fundamentales*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Bárcena, J. (2011). *El Gobierno de la Economía en la Constitución Europea. Crisis e indeterminación institucional*. Barcelona: Bosch Editor.
- Benedicto XVI, Peter Seewald. (2009). *Luz del Mundo. El papa, la Iglesia y los signos de los tiempos. Una conversación con Peter Seewald*. Múnich: Editorial Herder.
- Benedicto XVI. (2009). *Caritas in veritate*. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Bernal, C. (2007). *El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Bertelsen, S. (2010). *“Métodos de solución de conflictos entre”*. Santiago: Cuadernos del Tribunal Constitucional.
- Comisión Europea. (15 de agosto de 2014). *¿Por qué se extendió la crisis?* Obtenido de Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/the_financial_and_economic_crisis/why_did_the_crisis_spread/index_es.htm
- Comisión Europea. (15 de agosto de 2014). *¿Por qué se produjo la crisis?* Obtenido de Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/the_financial_and_economic_crisis/why_did_the_crisis_happen/index_es.htm
- Comisión Europea. (15 de 08 de 2014). *Ayuda a Grecia* . Obtenido de Comisión Europea: http://ec.europa.eu/news/economy/120319_es.htm
- Comisión Europea. (15 de agosto de 2014). *Ayudar a los países en dificultades*. Obtenido de Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/the_financial_and_economic_crisis/assisting_countries_in_trouble/index_es.htm
- Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. (octubre de 2011). *The Economic Adjustment Programme - Fifth review - October 2011*. Obtenido de European Commission:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2011/pdf/ocp87_en.pdf
- Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. (Marzo de 2012). *The Second Economic Adjustment Programme for Greece* . Obtenido de European Commission :
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf
- Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. (Abril de 2014). *The Second Economic Adjustment Programme for Greece - Fourth Review - April 2014*. Obtenido de European Commission :
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/pdf/ocp192_en.pdf
- DIW. (03 de julio de 2013). *Gesamtwirtschaftliche Steuerquote wird in diesem Jahr 23,6 Prozent des BIP betragen*. Obtenido de DIW Berlin :
http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.423978.de
- EFSF. (28 de julio de 2014). *European Financial Stability Facility*. Obtenido de EFSF:
<http://www.efs.europa.eu/attachments/EFSS%20FAQ%202014-07-28.pdf>

- Europa. (04 de marzo de 2010). *EL principio de subsidiariedad*. Obtenido de Europa:
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0017_es.htm
- Europa. (06 de mayo de 2010). *La Carta de los Derechos Fundamentales*. Obtenido de Europa:
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_es.htm
- Europa. (25 de enero de 2010). *Los Parlamentos nacionales*. Obtenido de Europa:
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0042_es.htm
- Europa. (23 de marzo de 2010). *Reparto de competencias en la Unión Europea*. Obtenido de Europa:
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0020_es.htm
- Europa. (08 de marzo de 2011). *Junta Europea de Riesgo Sistémico*. Obtenido de Europa:
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/mi0068_es.htm
- European Comission. (20 de octubre de 2014). *Financial assistance to Greece*. Obtenido de European Comission:
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/
- Eurostat. (2008). *At-risk-of-poverty threshold (source: SILC)* . Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tessi014&language=en>
- Eurostat. (2008). *Compensation of employees*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00013&language=en>
- Eurostat. (2008). *Duration of working life*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde420&plugin=1>
- Eurostat. (2008). *Employees with a contract of limited duration (annual average)*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00073&plugin=1>
- Eurostat. (2008). *Employees with a contract of limited duration (annual average)*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00073&plugin=1>
- Eurostat. (2008). *Employment rate, by sex*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec420&plugin=1>
- Eurostat. (2008). *Expenditure on social protection*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00098&language=en>
- Eurostat. (2008). *Expenditure on social protection per inhabitant*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00100&language=en>
- Eurostat. (2008). *Exports of goods and services in % of GDP*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tet00003&plugin=1>

- Eurostat. (2008). *GDP and main compotents- Current prices*. Obtenido de Eurostat:
<http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>
- Eurostat. (2008). *GDP per capita in PPS*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1>
- Eurostat. (2008). *General government deficit/surplus*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00127&language=en>
- Eurostat. (2008). *General government gross debt* . Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdde410&language=en>
- Eurostat. (2008). *Gini coefficient of equivalised disposable income (source: SILC)*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tessi190>
- Eurostat. (2008). *Glossary:Purchasing power standard (PPS)* . Obtenido de Eurostat:
[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Purchasing_power_standard_\(PPS\)](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Purchasing_power_standard_(PPS))
- Eurostat. (2008). *Goods and services, imports and exports*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00110&language=en>
- Eurostat. (2008). *HICP- inflation rate*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1>
- Eurostat. (2008). *Hours worked per week of full-time employment* . Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00071&plugin=1>
- Eurostat. (2008). *Hours worked per week of part-time employment* . Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00070&plugin=1>
- Eurostat. (2008). *Imports of goods and services in % of GDP*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tet00004&plugin=1>
- Eurostat. (2008). *Income quintile share ratio (S80/S20) (source: SILC)* . Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tessi180>
- Eurostat. (2008). *Labour productivity per hour worked* . Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec310&plugin=1>
- Eurostat. (2008). *Labour productivity per hour worked* . Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec310&plugin=1>
- Eurostat. (2008). *Labour productivity per person employed* . Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00116&plugin=1>

- Eurostat. (2008). *People at risk of poverty or social exclusion*. Obtenido de Eurostat:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en
- Eurostat. (2008). *People living in households with very low work intensity*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdsc310&language=en>
- Eurostat. (2008). *Persons employed part-time - Total*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00159&plugin=1>
- Eurostat. (01 de enero de 2008). *Population as percentage of EU28 population*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00005&plugin=1>
- Eurostat. (01 de enero de 2008). *Population density*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00003&plugin=1>
- Eurostat. (01 de enero de 2008). *Population on 1 January*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00001&language=en>
- Eurostat. (2008). *Total expenditure on social protection by type*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00101&language=en>
- Eurostat. (2008). *Total expenditure on social protection per head of population. ECU/EUR*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00099&plugin=1>
- Eurostat. (2008). *Total fertility rate*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde220&plugin=1>
- Eurostat. (2008). *Total general government expenditure*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00023&language=en>
- Eurostat. (2008). *Total general government revenue*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00021&language=en>
- Eurostat. (2008). *Unemployment rat, by sex*. Obtenido de Eurostat:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec450&plugin=1>
- Fernández, J. (2008). *Principio de proporcionalidad y derechos fundamentales*:. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos.
- Georgiadou en Kollias. (22 de Julio de 2012). *La plaza estaba llena de indignados ...* Obtenido de Tovima: <http://www.tovima.gr/society/article/?aid=467898>
- Giehle, S. (2011). *Seguridad social*. Obtenido de Tatsachen über Deutschland: <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/sociedad/main-content-08/reforma-del-sistema-sanitario.html>
- Häberle, P. (2003). *La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales*. Madrid: Dykinson.
- Hacke, C. (24 de octubre de 2012). *Unser Steuersystem*. Obtenido de Bundeszentrale für politische Bildung : <http://www.bpb.de/izpb/147080/unser-steuersystem?p=all>

- Isler, C. (2011). *“Una crítica finnisiiana al principio de proporcionalidad”*. Santiago: Ius Publicum.
- Konrad Adenauer Stiftung . (2011). *¿Qué es la Economía Social de Mercado?* Berlín: http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/SOPLA_Einfuehrung_SoMa/part_e1_13.pdf.
- Koussis y Costas . (2013). “Large Scale Mobilizations against Austerity Policies and the Memoranda, 2010-2012”. *‘Crisis in Greece’*. Atenas: Centre for Political Studies, Panteion University.
- Kraft, I. (2007). *“Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im deutschen Rechtsverständnis”*. Stuttgart: Bayerische Verwaltungsblätter.
- La Constitución de Grecia. (2008). *La Constitución de Grecia*. Obtenido de Organización Mundial de Propiedad Intelectual: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=224011#LinkTarget_3191
- Maier, R. (Abril de 2014). *El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF)*. Obtenido de Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.5.html
- OCDE. (2010). *Greece at a Glance: Policies for a Sustainable Recovery*. Obtenido de OECD: <http://www.oecd.org/greece/44785912.pdf>
- Parlamento Europeo. (2014). *El Principio de Subsidiariedad*. Obtenido de Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.2.2.pdf
- Polanyi, K. (1994). *La Gran Transformación*. Madrid: Ediciones de la Piqueta.
- Pontificio Consejo "Justicia y Paz" . (02 de abril de 2004). *Doctrina Social de la Iglesia: El Principio de Solidaridad*. Obtenido de La Santa Sede: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#VI. EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD
- Pontificio Consejo "Justicia y Paz". (02 de abril de 2004). *Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: Justicia*. Obtenido de La Santa Sede: [http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#La justicia](http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#La%20justicia)
- Pontificio Consejo "Justicia y Paz". (02 de abril de 2004). *Doctrina Social de la Iglesia: El Principio de Subsidiariedad*. Obtenido de La Santa Sede: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#IV. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD
- Pontificio Consejo "Justicia y Paz". (02 de abril de 2004). *Doctrina Social de la Iglesia: El Principio del Bien Común*. Obtenido de La Santa Sede: [http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#Significado y aplicaciones principales](http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#Significado%20y%20aplicaciones%20principales)
- Pontificio Consejo "Justicia y Paz". (04 de abril de 2004). *Doctrina Social de la Iglesia: La Libertad*. Obtenido de La Santa Sede: [http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#La libertad](http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#La%20libertad)
- Rainer Arnold, José Martínez, Francisco Zúñiga. (2012). *El Principio de Proporcionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Obtenido de Scientific Electronic Library Online: <http://www.scielo.cl/pdf/estconst/v10n1/art03.pdf>

- Sachs, W. (2010). *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*. Londres : Zed Books Ltd.
- Scannone, J. C. (16 de octubre de 2014). La gratuidad en la economía de mercado. (F. A. Campos, Entrevistador)
- Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad*. Barcelona: Planeta.
- Sergi, Vittorio y Markos Voyatzoglou en Flesher y Cox. (2013). *Understanding European movements*. Londres: Routledge.
- Sotiropoulos, D. (diciembre de 2013). *Civil Society in Greece*. Obtenido de Konrad Adenauer Stiftung : http://www.kas.de/wf/doc/kas_38533-1522-2-30.pdf?140808173627
- Tatsache über Deutschland. (2011). *Atención sanitaria universal*. Obtenido de Tatsachen über Deutschland : <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/sociedad/main-content-08/atencion-sanitaria-universal.html>
- Tatsachen über Deutschland. (2011). *Las pymes, núcleo y eje de la economía*. Obtenido de Tatsachen über Deutschland: <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/economia.html>
- Tatsachen über Deutschland. (2011). *Mayor previsión privada para la vejez*. Obtenido de Tatsachen über Deutschland: <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/sociedad/main-content-08/otras-reformas.html>
- Unión Europea. (30 de marzo de 2010). *Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea*. Obtenido de EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ES:PDF>
- Unión Europea. (2010). *Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la UE.
- Unión Europea. (2010). *Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la UE.